

Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOPP)

Informe Nacional de Costa Rica

Sergio Lacambra
Ginés Suarez
Tsuneki Hori
Rolando Durán
Ana María Torres
Ernesto Visconti

División de Medio
Ambiente, Desarrollo Rural
y Gestión del Riesgo por
Desastres

NOTA TÉCNICA N°
IDB-TN-754

Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOPP)

Informe Nacional de Costa Rica

Sergio Lacambra
Ginés Suarez
Tsuneki Hori
Rolando Durán
Ana María Torres
Ernesto Visconti

Octubre 2015

Catalogación en la fuente proporcionada por la
Biblioteca Felipe Herrera del
Banco Interamericano de Desarrollo

Informe iGOPP Costa Rica / Sergio Lacambra, Ginés Suarez, Tsuneki Hori, Rolando Durán, Ana María Torres, Ernesto Visconti.

p. cm. — (Nota técnica del BID ; 754)

1. Natural disaster—Government policy—Costa Rica. 2. Emergency management—Government policy—Costa Rica. 3. Environmental risk assessment—Government policy—Costa Rica. I. Lacambra, Sergio. II. Suarez, Ginés. III. Hori, Tsuneki. IV. Durán, Rolando. V. Torres, Ana María. VI. Visconti, Ernesto.

VII. Banco Interamericano de Desarrollo. División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres. VIII. Serie.

IDB-TN-754

JEL code: Q540

Palabras clave: iGOPP, índice de Gobernabilidad de Políticas Públicas, Cambio Climático, Gestión de Riesgo de Desastres, Desastres naturales, Políticas Públicas, GRD, Identificación del riesgo, Reducción del riesgo, Preparativos para la respuesta, Planificación de la recuperación post-desastre, Protección financiera, Costa Rica.

<http://www.iadb.org>

Copyright © 2015 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Contacto: Sergio Lacambra (slacambra@iadb.org); Tsuneki Hori (tsunekih@iadb.org)

Este documento fue preparado por:

Los especialistas del BID en Gestión del Riesgo: Sergio Lacambra, Ginés Suarez y Tsuneki Hori.

Los consultores externos en Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático: Rolando Duran y Ana María Torres.

La revisión de indicadores desde el punto de vista legal fue realizada por el abogado especializado en marcos legales para la Gestión del Riesgo: Ernesto Visconti.

También se contó con valiosos aportes del Gobierno de Costa Rica.

El desarrollo y publicación de este documento fue financiado por medio de la Cooperación Técnica Regional RG-T2064, financiada por el Fondo Multidonante de Prevención de Desastres con contribuciones de Canadá, España, Japón y Korea.

Índice de Contenidos

Resumen Ejecutivo	1
1. Introducción	8
2. Marco Institucional	21
3. Resultados Generales del iGOPP	25
a. Marco general de Gobernabilidad para la GRD (MG)	27
b. Identificación del Riesgo (IR)	31
c. Reducción de Riesgos (RR)	35
d. Preparativos para la Respuesta (PR)	40
e. Planificación de la recuperación post-desastre (RC)	44
f. Protección Financiera (PF)	47
4. Conclusiones	53
5. Recomendaciones de Reforma Política	57

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Componentes de Reforma en Política Pública en GRD.	2
Gráfico 2. Fases de la Política Pública según el iGOPP.....	3
Gráfico 3. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Según la ley 8488 de 2005).....	24
Gráfico 4. Componentes de Reforma de Política Pública en GRD según el iGOPP	26
Gráfico 5. Fases de la Política Pública según iGOPP	27
Gráfico 6. Marco general de Gobernabilidad para la GRD por fases de la Política Pública	31
Gráfico 7. Identificación del Riesgo por fases de la Política Pública	35
Gráfico 8. Reducción de Riesgo (RR) por fases de la Política Pública	39
Gráfico 9. Preparación para la Respuesta (PR) por fases de la Política Pública.	43
Gráfico 10. Planificación de la Recuperación Post – Desastre (RC) por fases de la Política Pública.....	47
Gráfico 11. Protección Financiera (PF) por fases de la Política Pública	52

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Clasificación y Codificación del iGOPP.....	20
Cuadro 2. Componentes de Reforma en Política Pública en GRD según el iGOPP	26
Cuadro 3. Fases de la Política Pública según iGOPP	27
Cuadro 4. Marco General de Gobernabilidad para la GRD por fases de la Política Pública	31
Cuadro 5. Identificación del Riesgo (IR) por fases de la Política Pública.....	34
Cuadro 6. Reducción de Riesgo (RR) por fases de la Política Pública	39
Cuadro 7. Preparación para la Respuesta (PR) por fases de la Política Pública	43
Cuadro 8. Planificación de la Recuperación Post – Desastre (RC) por fases de la Política Pública.....	46
Cuadro 9. Protección Financiera (PF) por fases de la Política Pública	51

Siglas

ACC	Adaptación al Cambio Climático
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CNE	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Desastres
COE	Centro de Operaciones de Emergencia
GRD	Gestión de Riesgo de Desastre
ICO	Instancias de Coordinación
iGOPP	Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgos de Desastres
IR	Identificación de Riesgo
MG	Marco General de la Gobernabilidad
PF	Protección Financiera
PR	Preparación para la Respuesta
RC	Planificación de la Recuperación
RR	Reducción de Riesgo
SEVRI	Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional
SNGR	Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Resumen Ejecutivo

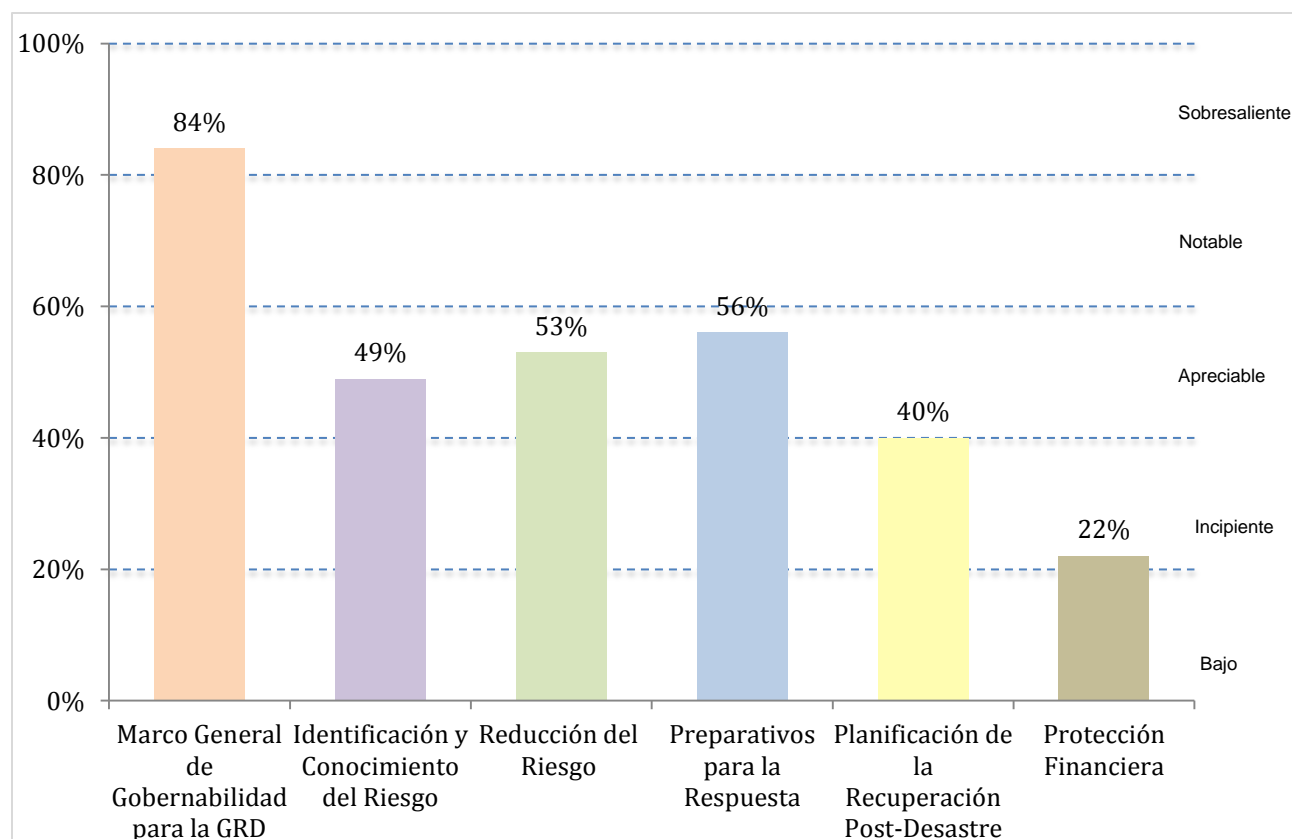
Costa Rica es un país frecuentemente impactado por situaciones de desastre en todo su territorio nacional. A lo largo de al menos los últimos 70 años el país ha venido generando políticas e instrumentos orientados a la reducción de las condiciones de vulnerabilidad y al mejoramiento de las capacidades institucionales de respuesta. La adopción temprana de normas sismo resistentes, el fortalecimiento de instituciones de respuesta como la Cruz Roja Costarricense y el cuerpo de bomberos, la actualización normativa y organizacional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias han permitido una serie de condiciones para enfrentar el riesgo de desastres. Estos mismos proceso de desastres, y de decisiones para su manejo, son visibles en diferentes sectores e instituciones públicas, las cuales han venido generando instrumentos propios de gestión prospectiva y correctiva a lo largo de los años.

Aun así, la exposición a las amenazas sigue creciendo, así como el impacto de los desastres. La adopción en el año 2010 de un nuevo Plan Nacional de Gestión del Riesgo significó a la vez un reconocimiento de esta problemática, así como un momento de inflexión para actualizar compromisos y responsabilidades. Varios factores de debilidad en este proceso han sido identificados por las autoridades costarricenses, en particular la necesidad de descentralizar la gestión del riesgo con una visión integral, el mejoramiento de la articulación de las estrategias y esfuerzos sectoriales y el aumento de la inversión en procesos preventivos.

Los resultados de la aplicación del iGOPP en Costa Rica muestran un nivel de cumplimiento del 50.8% de indicadores, considerado dentro del rango de “apreciable” en la clasificación establecida para este índice. Los resultados por “componentes de reforma de política pública para la GDR” revelan que el país tiene sus mayores avances en los aspectos relacionados con el “Marco general de gobernabilidad para la GRD”, con un 84% de indicadores cumplidos, lo que lo clasifica en el rango de “Notable”. En el nivel “Apreciable” se encuentran los “Preparativos para la respuesta” 56%, la “Reducción de riesgo” 53% y la “Identificación y conocimiento del riesgo” con

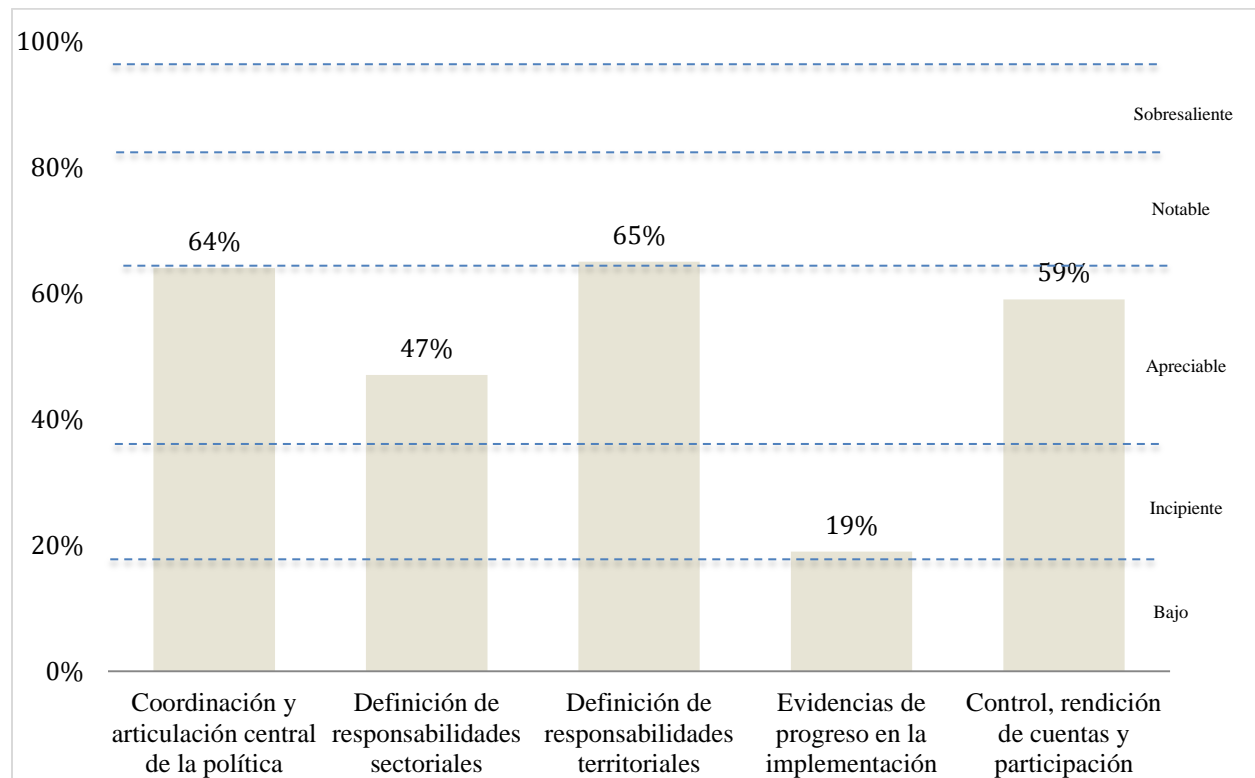
un 49%. La “Planificación para la recuperación” se encuentra en el rango “Incipiente” con un 40% así como la “Protección Financiera” con un 22%.

Gráfico 1. Componentes de Reforma en Política Pública en GRD. Costa Rica (2013)



El análisis general desde la dimensión de las fases de la política pública, muestra un comportamiento muy homogéneo dentro del rango “Apreciable” con cuatro fases: “Coordinación y articulación central de la política” con 64%, “Definición de responsabilidades territoriales” con 65%, “Control, rendición de cuentas y participación” con un 59%, y “Definición de responsabilidades sectoriales” con un 47% de indicadores alcanzados. Las “Evidencias de progreso en la implementación” se encuentran en el rango “Incipiente” con un 19%, lo cual podría indicar que el país no está aprovechando adecuadamente las ventajas que ofrece la existencia de condiciones normativas y de un marco institucional favorable para determinados aspectos de la GRD.

Gráfico 2. Fases de la Política Pública según el iGOPP. Costa Rica (2013)



Conclusiones de la aplicación del iGOPP¹:

1. En términos del “Marco general de gobernabilidad para la GRD”, se observa que Costa Rica cuenta con un marco jurídico moderno. Su Ley nacional de emergencias y prevención del riesgo data del 2005 y fue reglamentada en 2007 (en Costa Rica las leyes entran en vigencia aún sin estar reglamentadas). Por otra parte, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo fue aprobado por Decreto Ejecutivo en 2010. Es importante observar que, si bien aún se encuentra dentro del rango “Notable”, con un 84% de indicadores cumplidos, 4 de las 5 fases de

¹ En adelante se utilizará los términos de “norma expresa” para referir a la normatividad que tiene como objeto específico procesos de la gestión del riesgo, y “normas habilitadoras” para aquellas normas que regulan otros procesos y sectores, pero que incluyen elementos que facilitan o concretan la aplicación de medidas de gestión del riesgo.

política alcanzaron el 100% de cumplimiento, para un rango de “Sobresaliente” y es en las “Evidencias de progreso en la implementación” donde el comportamiento general se afecta, puesto que solo fue posible verificar un 20% de los indicadores (rango “Bajo”). La totalidad de indicadores no cumplidos está relacionado únicamente con aspectos presupuestarios y financieros.

2. Los componentes de Identificación y conocimiento del riesgo (49%), Reducción del riesgo (53%) y Preparativos para la respuesta (56%) muestran un nivel de alcance muy homogéneo. Llama la atención el nivel obtenido por los dos primeros, más ligados a los aspectos prospectivos y correctivos, mientras que los Preparativos para la respuesta, típicamente el componente más desarrollado por el devenir histórico que han tenido estas organizaciones, no es en el caso de Costa Rica el componente más desarrollado. Aun así, otro aspecto homogéneo en el comportamiento de estos tres componentes es que varias fases de la política alcanzan niveles “apreciable”, y vuelve a ser las “Evidencias de progreso en la implementación” las que aporta los niveles bajos, que generan promedios bajos. Es importante considerar que muchos de los indicadores no cumplidos se deben en realidad a la falta de acceso al verificable.
3. Los temas de “Planificación de la recuperación post-desastre”, con un 40% y de “Protección Financiera” con un 22% son los componentes que muestran el menor porcentaje de cumplimiento de indicadores, con una diferencia notable frente a los otros.
4. Siendo Costa Rica uno de los pocos países que tiene una legislación expresa para el proceso de recuperación, es importante observar que la distribución es altamente heterogénea entre las fases, con dos de ellas en 0%, una en 50% y dos en 75%. Esta situación muestra que la fragilidad mayor no está tanto en el marco jurídico expreso, sino en la presencia del tema en la normatividad sectorial (0%) y en el progreso en la implementación (0%).

5. El componente de Protección Financiera muestra un comportamiento de bajo cumplimiento muy homogéneo, ya que las fases que alcanzan la mayor cantidad de indicadores (Articulación central de la política y Definición de Responsabilidades Territoriales) cumplen únicamente un 33%.
6. La falta de un mecanismo que permita identificar a nivel del presupuesto la asignación de recursos a los distintos procesos de la gestión de riesgo de desastre ha limitado las posibilidades de valorar la implementación de los procesos de gestión del riesgo a nivel sectorial. Esto no significa que no se estén realizando avances en este sentido, sino que no han podido ser evidenciados por el iGOPP.
7. Con respecto a las fases de la política, vistas de forma transversal a todos los componentes, se puede observar que cuatro de ellas superan el 41% (rango “Apreciable”): Articulación central de la política, con un 64%; Definición de responsabilidades territoriales, con un 65%; La Definición de responsabilidades sectoriales, con un porcentaje más reducido (47%) y Rendición de cuentas y participación con un 59%. La fase de menor cumplimiento es la de Evidencias de progreso en la implementación, con un 19%.
8. La articulación central de la política, a lo largo de los componentes se comporta de forma homogénea, lo que hace concluir que la normatividad para la gestión del riesgo en el país alcanza un nivel importante de las expectativas. Esto lleva a concluir que una reforma a la normatividad expresa de la Gestión del Riesgo podría no ser prioritaria, vis à vis otras fases de la política pública.
9. En términos de lo sectorial, se puede observar una tendencia interesante en los Sistemas Específicos de Valoración del Riesgo Institucional, que se aproximan al concepto de continuidad de servicios y operaciones dentro del sector público. Este concepto, incluido en una Directriz de la Contraloría General de la

República, podría constituir un espacio para el desarrollo comprehensivo de la gestión del riesgo, más allá de la normatividad expresa.

10. Una de las fases que debería caracterizar un enfoque sistémico articulado, como lo es la Definición de responsabilidades sectoriales, muestra un comportamiento general en el límite inferior del rango “apreciable”, con un 47%. Su comportamiento es heterogéneo entre los componentes, incluso con un 0% de cumplimiento en el componente de Planificación de la recuperación post-desastre.
11. En términos de control, el Sistema Nacional encabezado por la Contraloría y con una fuerte participación de la Sala Constitucional, juegan un papel preponderante en la gestión del riesgo en Costa Rica. Esto puede ser considerado como una buena práctica a observar y promover.
12. Costa Rica ha implementado varios instrumentos para gestionar desde el punto de vista financiero la ocurrencia de desastres, los cuales deben ser fortalecidos y gestionados de manera integral. Costa Rica carece de un marco legal e institucional que asigne responsabilidades al Ministerio de Hacienda frente al diseño e implementación de una estrategia financiera de gestión del riesgo de desastres, lo cual es un requisito para implementar una estrategia sostenible en el tiempo.
13. La adopción de un Marco Nacional para la Recuperación, o instrumento equivalente, con fuerza legal, es imprescindible para mejorar la calidad de los procesos ex-post. La consideración de la recuperación de los medios de vida debería ser reforzado.
14. La identificación y estimación del riesgo requiere de una fuerte reforma o actualización normativa, que permita articular y mejorar la calidad de una información, que hoy se genera a partir de importantes procesos de

investigación, pero que no alcanzan aún los niveles de sinergia que su potencial permite. Sería recomendable el diseño y puesta en marcha de una plataforma de investigación e información sobre riesgo, que articule la información generada – bajo la forma de infraestructura de datos geoespaciales – y la haga disponible y utilizable en las diferentes escalas y niveles de gobierno.

1. Introducción

El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en gestión del riesgo de desastres (iGOPP) ha sido diseñado para evaluar la existencia formal, y por ende comprobable, de una serie de condiciones legales, institucionales y presupuestarias que se consideran fundamentales para que los procesos de la gestión del riesgo de desastres puedan ser implementados en un país determinado.

El iGOPP no reemplaza o sustituye otros indicadores relacionados con el tema, por el contrario complementa las diferentes metodologías existentes para la evaluación holística del riesgo y de la gestión del riesgo de desastres.

La utilidad práctica del iGOPP consiste en identificar los vacíos en el marco jurídico, institucional y presupuestal que pueden existir en un país determinado y ayuda a focalizar los esfuerzos del país y el apoyo eventual del BID en los aspectos relevantes de reforma de la gobernabilidad encaminados para fortalecer las opciones de la política pública de gestión del riesgo de desastres en los países de América Latina y el Caribe.

El iGOPP es un indicador compuesto o sintético que permite verificar si en un determinado país se dan las condiciones de gobernabilidad adecuadas (en términos jurídicos, institucionales y presupuestales) para poder implementar una política pública para la gestión integral del riesgo de desastres. En ese sentido, permite cuantificar en qué medida las acciones, políticas y reformas del gobierno y sus instituciones son consecuentes con los objetivos, resultados y procesos de la gestión del riesgo de desastres.

El iGOPP prioriza el cumplimiento explícito, y no el “intuitivo” de los indicadores. Su metodología del iGOPP determina el cumplimiento de indicadores cuando hay documentos verificables claros y explícitos de la condición que se quiere medir. Por otro lado, conforme a dicha metodología, aquellos indicadores que sean sustentados por verificables en los que se “intuye” el cumplimiento se consideran incumplidos; Es decir, el iGOPP prioriza el cumplimiento explícito, y no el “intuitivo”.

El diseño del iGOPP se fundamenta en dos pilares conceptuales:

- el marco conceptual de la Gestión del Riesgo de Desastres y sus principales procesos
- el marco conceptual de la Gobernabilidad y las fases de política pública

La **Gestión del Riesgo de Desastres** (GRD) se refiere a todos los procesos para diseñar, aplicar y evaluar estrategias, políticas y medidas destinadas a mejorar la comprensión del riesgo de desastres, fomentar la reducción y la protección financiera del riesgo de desastres, y promover la mejora continua en las prácticas de preparación, respuesta y recuperación para los casos de desastre, con el objeto explícito de aumentar la seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible. Incluye las gestiones prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo. La GRD se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad y la seguridad territorial y los derechos e intereses colectivos, y por lo tanto está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro y con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno.

En el marco conceptual del iGOPP la GRD se aborda como el conjunto de procesos orientados a adoptar e implementar políticas, estrategias y prácticas para reducir el riesgo y sus potenciales efectos, y se analiza en base a 6 componentes que son necesarios para su implementación efectiva. La selección de estos componentes se basa en la experiencia de los procesos de reforma política desarrollados por el Banco:

1. Marco general de Gobernabilidad para la GRD (MG): Se refiere a la existencia de una base normativa adecuada para la organización y coordinación de la GRD en cada país, la cual incluye tanto la normativa específica en GRD como la normas habilitadoras territoriales y sectoriales que garanticen su viabilidad. Así mismo la disponibilidad de recursos para la implementación de los procesos de la GRD, y el establecimiento de mecanismos adecuados de información y participación ciudadana, y de monitoreo, evaluación y seguimiento de dichos procesos.

2. Identificación y conocimiento del riesgo (IR): Es el proceso de la GRD enfocado en el conocimiento sobre orígenes, causas, alcance, frecuencia y posible evolución, entre otros aspectos, de los fenómenos potencialmente peligrosos, así como la ubicación, causas, evolución y capacidad de resistencia y de recuperación de elementos socioeconómicos expuestos. Este proceso incluye el análisis anticipado de las consecuencias y admite tanto interpretaciones objetivas y científicas como de percepción social e individual. En el marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita el desarrollo continuo del análisis del riesgo, herramienta que permite identificar sus factores y causas y la evaluación de los probables daños y pérdidas ocasionadas por eventos naturales.
3. Reducción del riesgo (RR): Proceso de la GRD enfocado en minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad, para evitar (prevención) o limitar (mitigación) el impacto adverso de amenazas, dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible. Este proceso comprende las intervenciones prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, y para su implementación adecuada requiere contar con una buena base de información sobre las condiciones de riesgo. En el marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita la intervención oportuna y adecuada de las causas que generan las condiciones de vulnerabilidad.
4. Preparativos para la respuesta (PR): Es el proceso de la GRD cuyo objetivo es planificar, organizar y poner a prueba los procedimientos y protocolos de respuesta de la sociedad en caso de desastre, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, permitiendo normalizar las actividades esenciales en la zona afectada por el desastre. La preparación se lleva a cabo mediante el monitoreo de eventos y la definición de escenarios de riesgo, la planificación, organización, entrenamiento, dotación de recursos y simulación para las acciones de alerta, evacuación, búsqueda, rescate, socorro, y asistencia humanitaria que deben realizarse en caso de emergencia. En el marco conceptual

del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita la implementación de mecanismos para una rápida y adecuada respuesta ante la ocurrencia o inminencia de una situación de emergencia.

5. Planificación de la recuperación post-desastre (RC): Proceso ex ante que se focaliza en la preparación para el rápido y adecuado restablecimiento de condiciones aceptables y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados en el área afectada, y la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad bajo condiciones de menor riesgo que lo que existía antes del desastre. En el marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita la implementación de mecanismos para un restablecimiento de medios de vida, de servicios básicos e infraestructura de forma tal que se reduzca la improvisación, la ineficiencia y la ineficacia en los procesos de recuperación post-desastre.
6. Protección financiera (PF): Es el proceso de la GRD que busca la combinación óptima de mecanismos o instrumentos financieros de retención y transferencia del riesgo para poder acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos, lo cual mejora la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de desastres (eventos menores y recurrentes y grandes desastres de baja recurrencia) y protege el balance fiscal del Estado². En el marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita el diseño e implementación de una estructura adecuada de retención y transferencia del riesgo de desastres.

² Fuente: Ghesquiere y Mahul, (2010). Financial Protection of the State against Natural Disasters, A Primer, The World Bank, Latin American and the Caribbean Region, Finance and Private Sector Development, Sustainable Development Network, September 2010.

Por otro lado, la **Gobernabilidad** se refiere a la capacidad de gobierno de un problema público. Esta capacidad se manifiesta en la gestión continuada y estable por parte del conjunto de los gobiernos y administraciones pero también de los actores sectoriales y privados de un país. En la medida que se incrementa la capacidad de gobierno del problema debería observarse una mayor efectividad de las decisiones adoptadas y de las políticas implementadas con el resultado de evitar un mayor número de consecuencias negativas en el caso de los desastres.

En el marco conceptual del iGOPP la Gobernabilidad se aborda desde la perspectiva de las tres fases del proceso de reforma de políticas públicas, que incluyen las siguientes:

A. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política

La inclusión en la agenda evidencia el grado de reconocimiento y aceptación del problema público, y el compromiso para su solución, y al nivel de presión política y social que reciben las instituciones. Para que el liderazgo político y la presión social y económica den lugar a la acción substantiva puede ser necesario que el nivel político avance significativamente en la línea de definir las responsabilidades de los distintos actores involucrados en el proceso de análisis. El iGOPP analiza la inclusión en la agenda a través de la verificación de la existencia de marcos legales apropiados para la GRD, o de la inclusión del tema en normas sectoriales y territoriales. El iGOPP analiza esta inclusión en la agenda y formulación de la política pública a tres niveles: (i) Coordinación y articulación central de la política; (ii) Definición de responsabilidades sectoriales; y (iii) Definición de responsabilidades territoriales.

B. Implementación de la política

El iGOPP analiza las evidencias de implementación a través de la verificación de acciones ejecutadas o de la disponibilidad de recursos asignados a los actores

responsables de implementar la política de GRD, en sus distintos componentes y niveles de gobierno.

C. Evaluación de la política

El iGOPP analiza la evaluación de la política pública desde la perspectiva de la existencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, así como de información y participación ciudadana.

Ambas dimensiones (GRD y Gobernabilidad/Política Pública) se evidencian en la estructura matricial del iGOPP, definida por 5 columnas que analizan las fases de la política pública, y 6 filas que analizan los componentes que caracterizan de los procesos de reforma de una adecuada política pública en GRD. Esta estructura matricial se expresa en 30 celdas, que integran un número variable de indicadores binarios.

El puntaje del índice va de 0 a 100 y se establece el siguiente sistema de clasificación:

%	Nivel de condiciones favorables de Gobernabilidad para la GRD
91 - 100%	Sobresaliente
71 - 90%	Notable
41 - 70%	Apreciable
21 - 40%	Incipiente
0 - 20%	Bajo

Cuadro 1. Clasificación y Codificación del iGOPP

Fases de Política Pública Componentes de reforma de política pública en GRD	1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política			2. Implementación de la política	3. Evaluación de la política
	Coordinación y articulación central de la política	Definición de responsabilidades sectoriales	Definición de responsabilidades territoriales	Evidencias de progreso en la implementación	Control, rendición de cuentas y participación
Marco general de la Gobernabilidad para la GRD (MG)	MG-1A	MG-1B	MG-1C	MG-2	MG-3
Identificación del Riesgo (IR)	IR-1A	IR-1B	IR-1C	IR-2	IR-3
Reducción del Riesgo (RR)	RR-1A	RR-1B	RR-1C	RR-2	RR-3
Preparación de la Respuesta (PR)	PR-1A	PR-1B	PR-1C	PR-2	PR-3
Planificación de la Recuperación Post-Desastre (RC)	RC-1A	RC-1B	RC-1C	RC-2	RC-3
Protección Financiera (PF)	PF-1A	PF-1B	PF-1C	PF-2	PF-3

2. Marco Institucional

La ley 8488 de 2005 establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo “entendido como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad civil organizada”.

El Sistema es encabezado por una Junta Directiva del más alto nivel político y cuenta con una oficina nacional: la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias CNE (ver Gráfico 3).

El ámbito de atribuciones establecido por la Ley tiene alcance a todas las entidades del sector público, tanto sectoriales, como autónomas (instituciones y empresas del estado) y territoriales. El nivel sub-nacional cuenta únicamente con la estructura municipal, como autoridades territoriales. La escala provincial y regional no tiene autonomía.

La articulación sistémica es asegurada por esta distribución de funciones y por las siguientes Instancias de Coordinación (ICO). La siguiente es su descripción textual:

a) Sectorial – institucional

- Comités sectoriales de gestión del riesgo: Instancias de coordinación de los sectores que conforman la estructura sectorial del Estado costarricense, integrado por representantes de las instituciones que los conforman, nombrados por los jefes máximos de cada una de ellas. Son coordinados por el representante de la institución rectora.
- Comités institucionales para la gestión del riesgo: Instancias de coordinación interna de cada una de las instituciones de la Administración central, la Administración Pública descentralizada del Estado, los gobiernos locales y el

sector privado. Organizan y planifican internamente las acciones de preparación y atención de emergencias, según su ámbito de competencia y con apego a la planificación sectorial.

b) Técnico – operativas

- Centro de Operaciones de Emergencia: El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) es la instancia permanente de coordinación, adscrita a la Comisión; reúne en el nivel nacional todas las instituciones públicas y los organismos no gubernamentales que trabajan en la fase de primera respuesta a la emergencia. Su responsabilidad es preparar y ejecutar, mediante procedimientos preestablecidos, labores coordinadas de primera respuesta ante situaciones de emergencia. Constituyen este Centro representantes designados por el máximo jerarca de cada institución que ejerzan al menos cargos con nivel de dirección. La coordinación del COE la ejerce un funcionario de la Comisión con un cargo igual al de los demás representantes.
- Comités asesores técnicos: Equipos técnicos interdisciplinarios conformados por especialistas y organizados según áreas temáticas afines; asesoran a la Comisión, al COE y a las demás instancias de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en los temas específicos de su competencia. Sus criterios se definen como de carácter especializado, técnico y científico y constituyen la base para la toma de decisiones en la prevención y atención de emergencias.

c) Regional – municipal

- Comités regionales, municipales y comunales de emergencia: Instancias permanentes de coordinación en los niveles regional, municipal y comunal. Por medio de ellos, la Comisión cumple su función de coordinación de las instituciones públicas, privadas, organismos no gubernamentales y la sociedad civil, que trabajan en la atención de emergencias o desastres. Se integran con la representación institucional o sectorial de los funcionarios con mayor autoridad

en el nivel correspondiente. Las organizaciones no gubernamentales, las privadas, las locales y comunales, definirán su representación por medio de la autoridad interna de cada una de ellas. En el caso de los comités municipales, la coordinación se realizará por medio de los alcaldes o de su representante, en los cuales recae, en primera instancia, la responsabilidad de coordinar con las instituciones las situaciones que se presenten en el ámbito de su competencia legal.

d) Redes temáticas – territoriales

- Instancias de análisis, seguimiento, planificación y coordinación para el tratamiento de temas específicos directamente relacionados con el riesgo, que, por su naturaleza e implicaciones de corto, mediano o largo plazo para el país, para una región o una actividad determinada, requieren atención particular que no puede ser resuelta en las otras instancias de coordinación. Integran estas redes especialistas, funcionarios designados con autoridad institucional para tomar decisiones, asesores técnicos y representantes de grupos interesados; todos con capacidad para contribuir al manejo de la problemática bajo control.

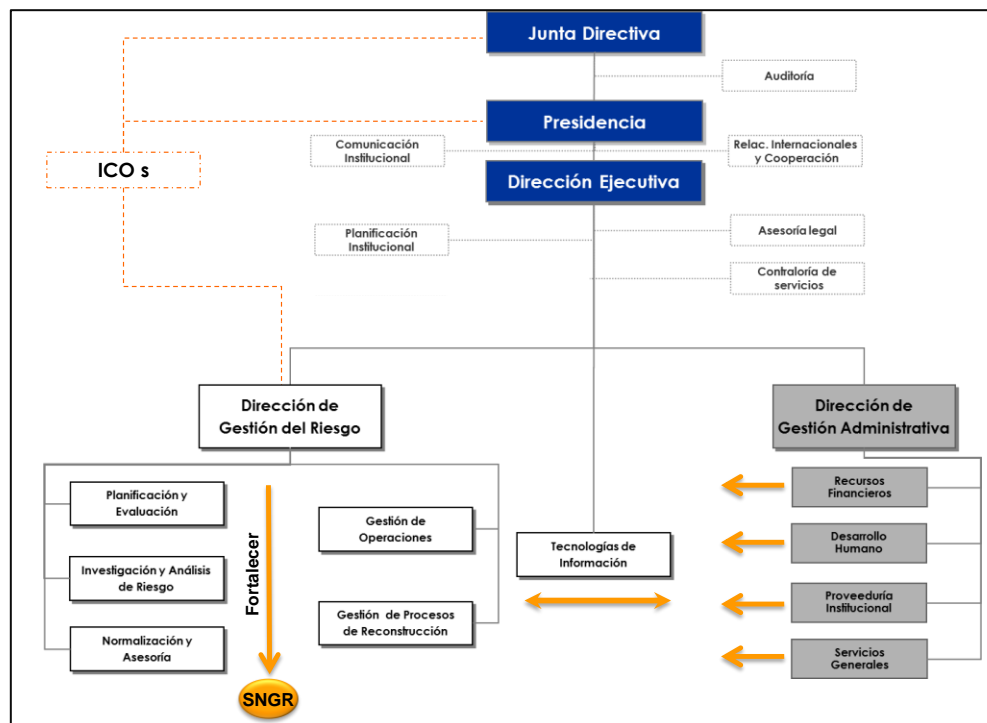
e) Foro Nacional sobre el Riesgo

- Instancia de seguimiento de la política de gestión del riesgo; periódicamente reúne a los integrantes de todas las instancias de coordinación descritas. El Foro deberá ser convocado por la Comisión una vez al año. En él la Comisión deberá presentar un informe de lo actuado por medio del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, para cumplir los fines de esta Ley. Por medio del abordaje de los temas relevantes, los participantes deberán discutir y proponer cursos de acción para el avance de la política. Las propuestas serán consideradas en el proceso de planificación estratégica de la Comisión y constituirán la base para definir sus acciones en el seguimiento del Sistema.

f) Comités de seguimiento a los subsistemas

- Instancia de coordinación encargada del seguimiento de los programas que conforman cada uno de los subsistemas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. La representación institucional en cada comité será definida por la Junta Directiva de la Comisión, en un número que no podrá exceder de cinco personas, por parte de instituciones afines a los programas que son parte de cada subsistema. En el caso del Subsistema de Preparativos y Respuesta, la instancia responsable de la coordinación será el COE.

Gráfico 3. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Según la ley 8488 de 2005)



3. Resultados Generales del iGOPP

Los resultados de la aplicación del iGOPP en Costa Rica muestran un nivel de cumplimiento del 50.8% de indicadores, considerado dentro del rango de “apreciable” en la clasificación establecida para este índice. Los resultados por “componentes de reforma de política pública para la GDR” revelan que el país tiene sus mayores avances en los aspectos relacionados con el “Marco general de gobernabilidad para la GRD”, con un 84% de indicadores cumplidos, lo que lo clasifica en el rango de “Notable”. En el nivel “Apreciable” se encuentran los “Preparativos para la respuesta” 56%, la “Reducción de riesgo” 53% y la “Identificación y conocimiento del riesgo” con un 49%. La “Planificación para la recuperación” se encuentra en el rango “Incipiente” con un 40% así como la “Protección Financiera” con un 22%.

El análisis general desde la dimensión de las fases de la política pública, muestra un comportamiento muy homogéneo dentro del rango “Apreciable” con cuatro fases: “Coordinación y articulación central de la política” con 64%, “Definición de responsabilidades territoriales” con 65%, “Control, rendición de cuentas y participación” con un 59%, y “Definición de responsabilidades sectoriales” con un 47% de indicadores alcanzados. Las “Evidencias de progreso en la implementación” se encuentran en el rango “Incipiente” con un 19%.

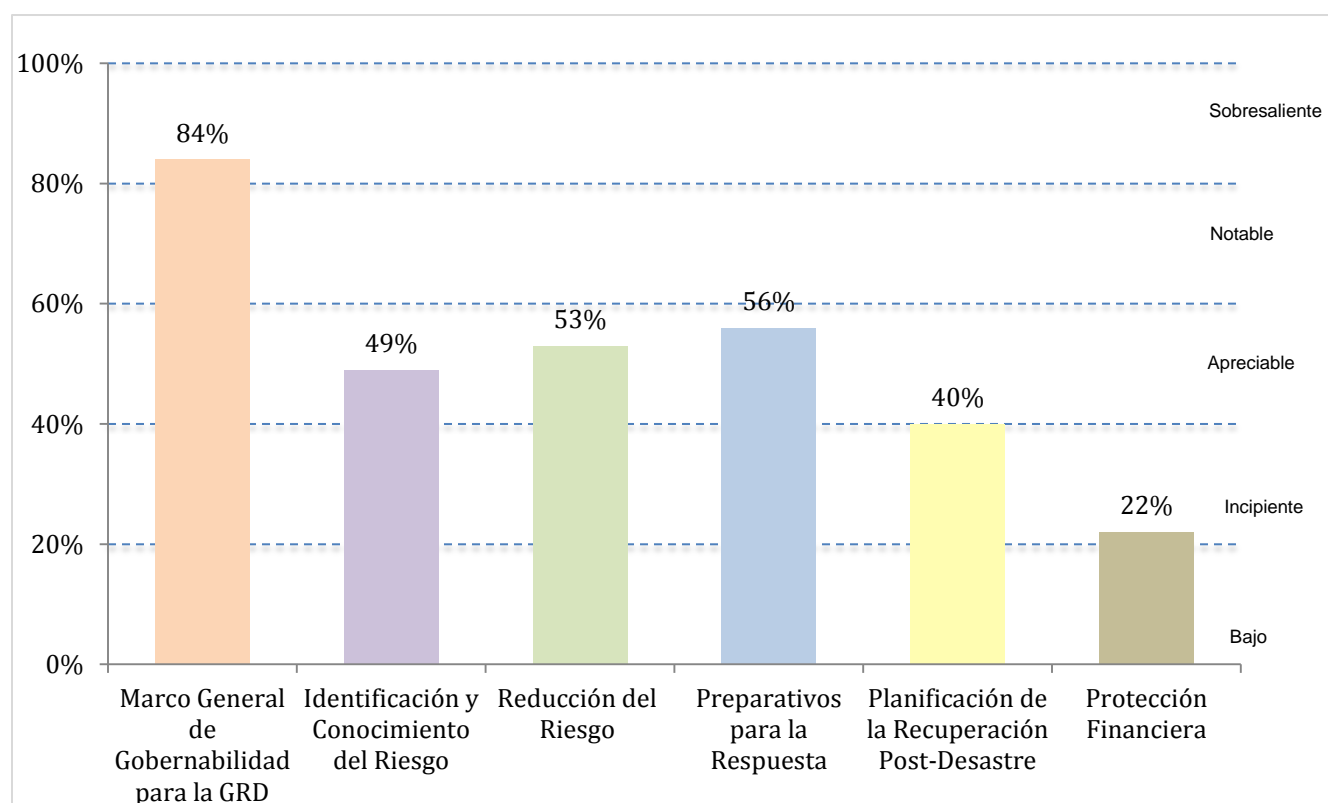
A continuación se presenta, para cada componente de la GRD, un *análisis cualitativo de los indicadores*, organizado por cada una de las fases de la política pública: 1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política: 1.1. Coordinación y articulación central de la política, 1.2. Definición de responsabilidades sectoriales, 1.3 Definición de responsabilidades territoriales; 2. Implementación de la política: 2.1 Evidencias de progreso en la implementación y 3. Evaluación de la política: 3.1. Control, rendición de cuentas y participación.

En las tablas y gráficos siguientes se puede observar los niveles generales de cumplimiento de los indicadores del iGOPP:

Cuadro 2. Componentes de Reforma en Política Pública en GRD según el iGOPP. Costa Rica (2013)

1	Marco general de gobernabilidad para la GRD	84%
2	Identificación y conocimiento del riesgo	49%
3	Reducción de riesgo	53%
4	Preparativos para la respuesta	56%
5	Planificación de la recuperación post - desastre	40%
6	Protección Financiera	22%

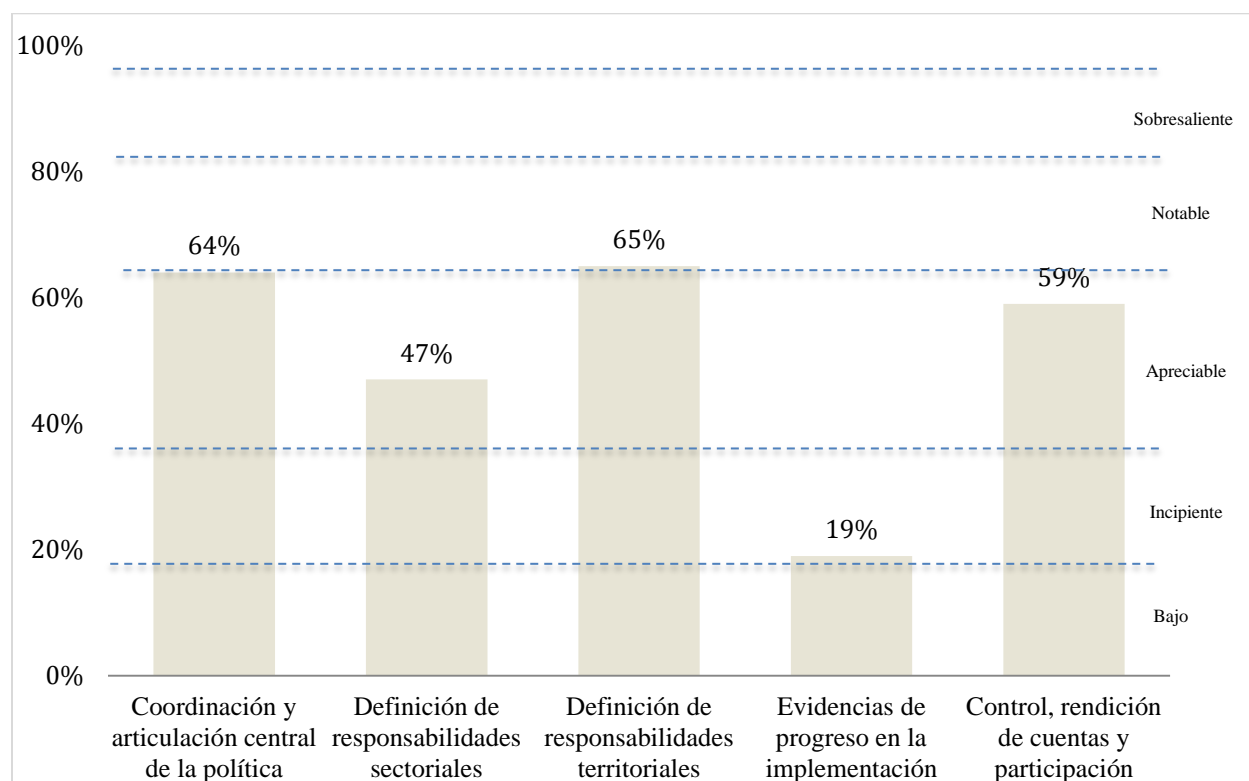
Gráfico 4. Componentes de Reforma de Política Pública en GRD según el iGOPP. Costa Rica (2013)



Cuadro 3. Fases de la Política Pública según iGOPP. Costa Rica (2013)

1	Coordinación y articulación central de la política	64%
2	Definición de responsabilidades sectoriales	47%
3	Definición de responsabilidades territoriales	65%
4	Evidencias de progreso en la implementación	19%
5	Control, rendición de cuentas y participación	59%

Gráfico 5. Fases de la Política Pública según iGOPP. Costa Rica (2013)



a. Marco general de Gobernabilidad para la GRD (MG)

Resultado para el componente: 84 % (“Notable”)

Este componente de política pública presenta el nivel más elevado de cumplimiento de indicadores entre todos los componentes observados en el iGOPP. Esta situación se explica, en buena parte, por el hecho de que Costa Rica actualizó su normativa

general, o norma expresa, en el año 2005. La actualización de la Ley fue el corolario de un proceso de integración progresiva de acciones preventivas y de reducción de riesgo en la estructura institucional de la entonces Comisión Nacional de Emergencia y de varios sectores.

Esta evolución significó pasar de un marco normativo basado en la preparación, la respuesta y fundamentalmente la reconstrucción post-desastre a otro, ya no bajo el contexto del impacto, sino bajo la necesidad de ajustar el esquema institucional a la prevención, bajo un enfoque de coordinación y articulación sistémica.

Como fenómeno particular, es más bien una resolución de la Sala Constitucional (Sala IV) la que determinó que las responsabilidades de prevenir y reducir el riesgo de desastres no correspondían a un órgano especializado, sino a la estructura misma de las entidades públicas: sectores y gobiernos locales. Esta condición particular fue la base para una reforma normativa mediante la cual se estableciera el ámbito de responsabilidades bajo un enfoque sistémico y descentralizado. Así, la Ley 8488 de 2005, estableció un marco general para la gobernanza del riesgo caracterizado por esa visión comprehensiva e integral.

También es importante señalar que el país comenzó a adoptar normativas de control de los procesos generadores del riesgo, desde inicios del siglo XX, con lo cual, la práctica de la prevención ya está consolidada – aunque no articulada – en el sector público del país.

Análisis cualitativo de los indicadores para cada fase de la política pública

1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política (MG-1):

1.1 Coordinación y articulación central de la política:

Esta fase de la política pública se encuentra en un nivel de 100%, con lo cual alcanza el nivel de “*Sobresaliente*”. Tal como se ha mencionado anteriormente, el proceso de

modernización del marco normativo nacional ha permitido el desarrollo de estas condiciones de gobernabilidad.

1.2 Definición de responsabilidades sectoriales

Esta fase también tiene un nivel de 100%, para un rango “*Sobresaliente*”, según los criterios establecidos en iGOPP.

1.3 Definición de responsabilidades territoriales

De igual forma que los anteriores, la Definición de responsabilidades territoriales alcanza el rango de “*Sobresaliente*”, con un 100% de indicadores cumplidos. La normatividad actual es descentralizada, siguiendo las políticas generales que en tema municipal tiene el país. Las responsabilidades en materia de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial están asignadas a los gobiernos locales (Municipalidades)³ y la normativa general de gestión de riesgo⁴ incluye responsabilidades para todos los niveles de gobierno.

Esta situación permite observar la existencia de condiciones sólidas para profundizar acciones más concretas de gestión del riesgo en el territorio.

2. Implementación de la política (MG-2):

2.1 Evidencias de progreso en la implementación.

Esta fase de la política pública es la que muestra el menor cumplimiento de indicadores (20%), con un rango “*Bajo*” y es responsable de reducir sensiblemente un componente que en sus otras cuatro fases cumple dentro del rango “*Sobresaliente*” con un 100% en todos los casos.

³ Véase indicador MG-1C-1

⁴ Véase indicador MG1A-1

Se encontró evidencia de asignación de recursos para el ente responsable de las funciones de rectoría de la gestión del riesgo de desastres⁵. Sin embargo, también se encontró que el país no cuenta con una herramienta que le permita identificar las asignaciones presupuestarias que se relacionan con programas en gestión del riesgo de desastres⁶, ni con actividades de adaptación al cambio climático⁷.

Con relación a la existencia de fondos para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, Costa Rica cuenta con el Fondo Nacional de Emergencias⁸. Sin embargo, no fue posible identificar fondos de desarrollo habilitados para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres⁹. Adicionalmente, el iGOPP permitió identificar que no existen incentivos presupuestales para que las unidades de gestión territorial o los sectores asignen recursos a la gestión del riesgo de desastres¹⁰.

3. Evaluación de la política (MG-3)

3.1. Control, rendición de cuentas y participación

Esta fase de la política también alcanza el 100% de indicador, con un rango de “*Sobresaliente*”. En este sentido, es importante observar la existencia de mecanismos de control y el papel que han jugado, y lo siguen haciendo, en el mejoramiento del marco institucional y normativo. La Contraloría General de la República tiene un papel activo y permanente en el monitoreo del cumplimiento de la norma, así como de la identificación de ajustes y su aplicación¹¹.

⁵ Véase indicador MG-2-2

⁶ Véase indicador MG-2-3

⁷ Véase indicador MG-2-4

⁸ Véase indicador MG-2-5

⁹ Véase indicador MG-2-8

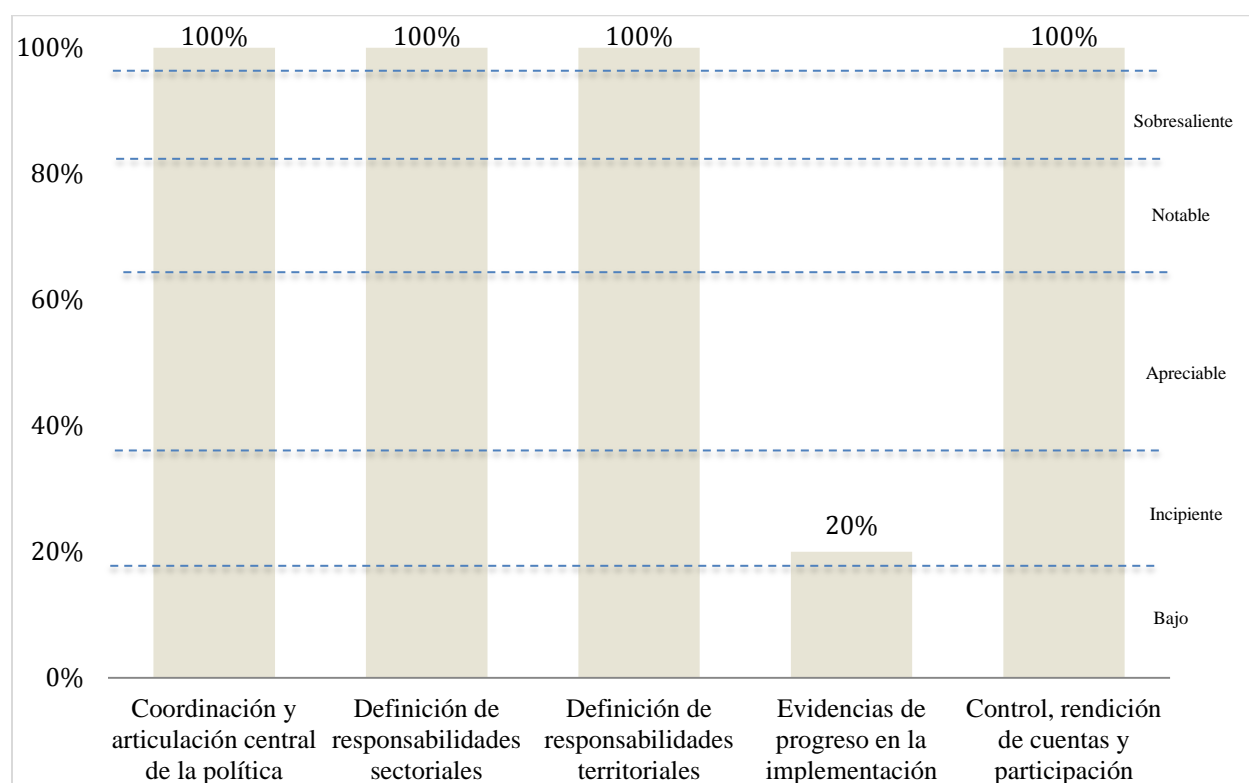
¹⁰ Véanse indicadores MG-2-9 y MG-2-10

¹¹ Véase indicador MG-3-3

Cuadro 4. Marco General de Gobernabilidad para la GRD por fases de la Política Pública. Costa Rica (2013)

1	Coordinación y articulación central de la política	100%
2	Definición de responsabilidades sectoriales	100%
3	Definición de responsabilidades territoriales	100%
4	Evidencias de progreso en la implementación	20%
5	Control, rendición de cuentas y participación	100%

Gráfico 6. Marco general de Gobernabilidad para la GRD por fases de la Política Pública. Costa Rica (2013)



b. Identificación del Riesgo (IR)

Resultado para el componente: 49% (“Apreciable”)

En términos de la Identificación de Riesgo se puede decir que el país se encuentra en un nivel intermedio, en relación con las condiciones identificadas en este componente.

Se puede observar un comportamiento irregular en las diferentes fases de la política, si bien ninguna alcanza el nivel “*Notable*” (71%) de indicadores cumplidos como se observará.

Análisis cualitativo de los indicadores para cada fase de la política pública.

1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política (IR-1):

1.1. Coordinación y articulación central de la política

En esta fase se cumple el 50% de los indicadores, para un rango de “*Apreciable*”, según los criterios del iGOPP. Existe una clara responsabilidad en la Gestión de Riesgo dentro del Marco General, puesto que la Ley estipula responsabilidades concretas para la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Desastres (CNE)¹², sin embargo no es así para los temas de información relacionados con los efectos del Cambio Climático¹³.

1.2. Definición de responsabilidades sectoriales

En términos de lo sectorial, se cumple un 44% de los indicadores, para un rango de “*Apreciable*”, según los criterios del iGOPP.

Se puede observar que no existe ninguna normativa que regule los estudios de amenaza, en particular la consideración de la frecuencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos¹⁴.

En cuanto a la responsabilidad explícita, por parte de sectores o servicios públicos, de realizar acciones de identificación del riesgo en su ámbito de responsabilidades, se observa un comportamiento heterogéneo.

¹² Véase indicador IR-1A-1

¹³ Véase indicador IR-1A-2

¹⁴ Véanse indicadores IR-1B-1 e IR-1B-2

La norma de gestión del riesgo establece estas responsabilidades¹⁵, mas sólo fue posible encontrarlas de forma expresa en las normas del sector ambiental, salud, vivienda, educación y agua¹⁶.

Un papel de alta relevancia en esta fase lo tiene el Código Sísmico de Costa Rica, ya que este define aspectos relacionados con edificaciones esenciales e infraestructura crítica¹⁷.

En esta fase de la política es importante observar que varias personas entrevistadas mencionaron que al existir una norma general que incluye este mandato, no es necesaria su especificación en las normativas sectoriales.

1.3 Definición de responsabilidades territoriales.

En esta fase de la política pública se cumple un 67% de los indicadores, para un rango “*Apreciable*”, según los criterios del iGOPP.

Existe una definición explícita de responsabilidades sobre identificación de riesgo en las municipalidades¹⁸, así como la obligatoriedad de zonificación en ciudades¹⁹. Sin embargo, no se ha definido por norma legal la responsabilidad de definir escalas o resolución para los análisis de riesgo en el territorio²⁰.

2. Implementación de la política (IR-2)

2.1 Evidencias de progreso en la implementación

En esta fase de la política pública se cumple un 33% de los indicadores, para un rango de “*Incipiente*”, según los criterios del iGOPP.

¹⁵ Véase indicador IR-1B-3

¹⁶ Véanse indicadores IR-1B-8, IR-1B-10, IR-1B-11, IR-1B-12 e IR-1B-15 respectivamente

¹⁷ Véase indicador IR-1B-18

¹⁸ Véase indicador IR-1C-1

¹⁹ Véase indicador IR-1C-3

²⁰ Véase indicador IR-1C-2

En términos de la implementación, a nivel sectorial solo en el caso del Ministerio de Ambiente y Energía, se identificaron partidas presupuestarias explícitas para realizar análisis de riesgo de desastres²¹. De otra parte, a nivel de empresas prestadoras de servicios públicos, se localizó evidencia que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados²² y el Instituto Costarricense de Electricidad²³ han realizado análisis de riesgo de desastres de su infraestructura.

3. Evaluación de la política (IR-3)

3.1. Control, rendición de cuentas y participación.

En esta fase de la política pública se cumple un 50% de los indicadores, para un rango de *incipiente*, según los criterios del iGOPP.

Al igual que en otros componentes, se pudo observar que la Entidad de Control (Contraloría General de la República), ha realizado verificaciones y evaluaciones sobre el cumplimiento de responsabilidades y procesos²⁴. Sin embargo, no se realiza la práctica de evaluar la calidad de los procesos de investigación, monitoreo e información en la información sobre amenazas²⁵.

Cuadro 5. Identificación del Riesgo (IR) por fases de la Política Pública. Costa Rica (2013)

1	Coordinación y articulación central de la política	50%
2	Definición de responsabilidades sectoriales	44%
3	Definición de responsabilidades territoriales	67%
4	Evidencias de progreso en la implementación	33%
5	Control, rendición de cuentas y participación	50%

²¹ Ver indicador IR-2-3

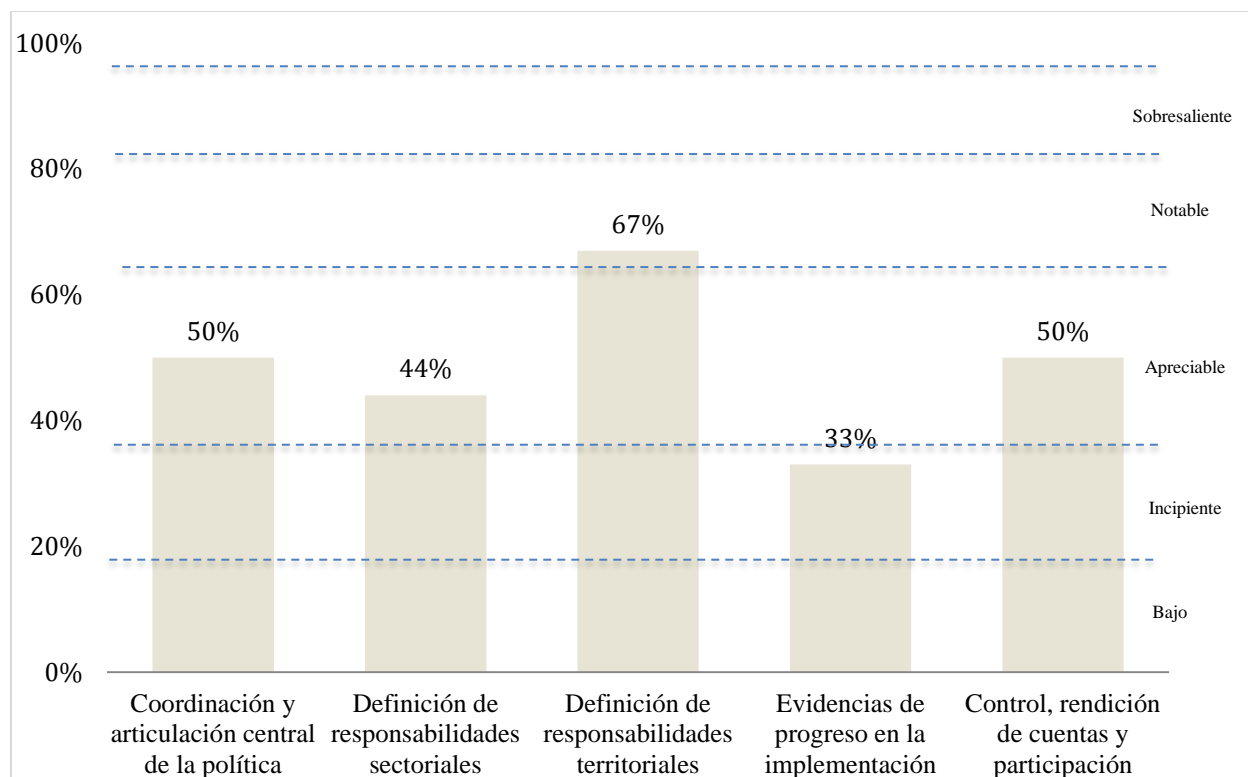
²² Ver indicador IR-2-13

²³ Ver indicador IR-2-15

²⁴ Véase indicador IR-3-5

²⁵ Véanse indicadores IR-3-3 e IR-3-4

Gráfico 7. Identificación del Riesgo por fases de la Política Pública. Costa Rica (2013)



c. Reducción de Riesgos (RR)

Resultado para el componente: 53% (“Apreciable”)

En cuanto a la Reducción de Riesgos se puede observar un fenómeno interesante, que atestigua de alguna manera el proceso histórico del país frente al problema: las fases que muestran el cumplimiento más elevado de indicadores son la Definición de Responsabilidades Territoriales, con un 80% (“Notable”), la Definición de Responsabilidades Sectoriales, con un 63% (Apreciable) y el Control, Rendición de cuentas y Participación, con un 60% (Apreciable). Esto muestra una definición de responsabilidades en las entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno, mientras que en la norma expresa se observa un cumplimiento menor, con un 40% en la Coordinación y Articulación central de la política (Incipiente). Finalmente, al igual que

en otros componentes, las Evidencias de Progreso en la implementación muestran un rango “Incipiente” con un 23% de indicadores cumplidos.

Análisis cualitativo de los indicadores para cada fase de la política pública.

1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política (RR-1)

1.1. Coordinación y articulación central de la política

En esta fase de la política pública se cumple un 40% de los indicadores, para un rango de “*Incipiente*”, según los criterios del iGOPP.

La reducción de riesgos está claramente establecida dentro de la normativa nacional, como ya se vio en el Marco General. Sin embargo, es importante señalar que no existe normatividad que establezca la articulación de competencias entre la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático²⁶.

Nuevamente, es importante destacar el papel del Código Sísmico de Costa Rica, ya que este incluye responsabilidades para la reducción del riesgo en edificaciones esenciales²⁷ y establece criterios de riesgo aceptable. Si bien esto último no alcanza a cumplir el indicador, puesto que se requieren dos tipos de amenaza, es de gran relevancia que si esté establecido para aspectos sísmicos²⁸.

1.2. Definición de responsabilidades sectoriales

En esta fase de la política pública se cumple un 63% de los indicadores, para un rango de “*Apreciable*”, según los criterios del iGOPP.

²⁶ Véase indicador RR-1A-1

²⁷ Véase indicador RR-1A-3

²⁸ Véase indicador RR-1A-2

Las responsabilidades sectoriales están claramente integradas en la normatividad para la gestión del riesgo. De igual forma, los sectores de agricultura, salud, vivienda, educación, agua y saneamiento, y telecomunicaciones ²⁹ incluyen responsabilidades expresas en su normativa.

Por otra parte, el iGOPP revela que el país ha avanzado en la implementación de normatividad que obliga a la incorporación del análisis de riesgo en el proceso de inversión pública, en la fase de formulación de proyectos³⁰.

1.3 Definición de responsabilidades territoriales

En esta fase de la política pública se cumple un 80% de los indicadores, para un rango de “*Notable*”, según los criterios del iGOPP.

Es importante señalar que el país cumple con 4 de los 5 indicadores establecidos para esta fase de la política. El único indicador que no se cumple es el establecimiento explícito de responsabilidad para la gestión del riesgo en los municipios. Si bien se puede inferir claramente que esta responsabilidad existe, puesto que está indicada en la norma expresa de gestión de riesgo y en la definición de responsabilidades sobre la planificación y ordenamiento del territorio, al no estar literalmente incluida en el código municipal, el indicador ha sido dado como no cumplido³¹.

2. Implementación de la política (RR-2):

2.1 Evidencias de progreso en la implementación.

En esta fase de la política pública se cumple un 23% de los indicadores, para un rango de “*incipiente*”, según los criterios del iGOPP.

²⁹ Véanse indicadores RR-1B-8, RR-1B-9, RR-1B-10, RR-1B-11, RR-1B-14 y RR-1B-15

³⁰ Ver indicador RR-1B-17

³¹ Véase indicador RR-1C-2

En términos de implementación de la política a través de asignaciones presupuestarias para actividades de reducción de riesgo de desastres, solo se pudo verificar fondos asignados al Ministerio de Obras Públicas y Transporte³².

En cuanto a la implementación de medidas en el contexto de empresas proveedoras de servicios públicos, se encontró evidencia de asignación de recursos a actividades de reducción de riesgo de desastres en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados³³ y en el Instituto Costarricense de Electricidad³⁴.

Es interesante resaltar el concepto de riesgo y continuidad de servicios que está establecido en la normatividad nacional (D-3-2005-CO-DFOE, Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional – SEVRI, Contraloría General de la República). Este enfoque está orientado a la responsabilidad que tienen los/as jerarcas de las instituciones, así como funcionarios, de asegurar la continuidad de los servicios y funciones y ha generado ya dos instrumentos sectoriales (Salud y Agricultura). Esto bajo un concepto de riesgo total de la institución, donde entran consideraciones financieras, laborales y de desastres.

3. Evaluación de la política (RR-3):

3.1. Control, rendición de cuentas y participación.

En esta fase de la política pública se cumple un 60% de los indicadores, para un rango de “*Apreciable*”, según los criterios del iGOPP.

Se observa el cumplimiento de indicadores en términos de régimen de sanciones por daños al ambiente, verificaciones de la Contraloría General de la República y responsabilidades para el monitoreo y evaluación de planes de ordenamiento

³² Véase indicador RR-2-7

³³ Véase indicador RR-2-11

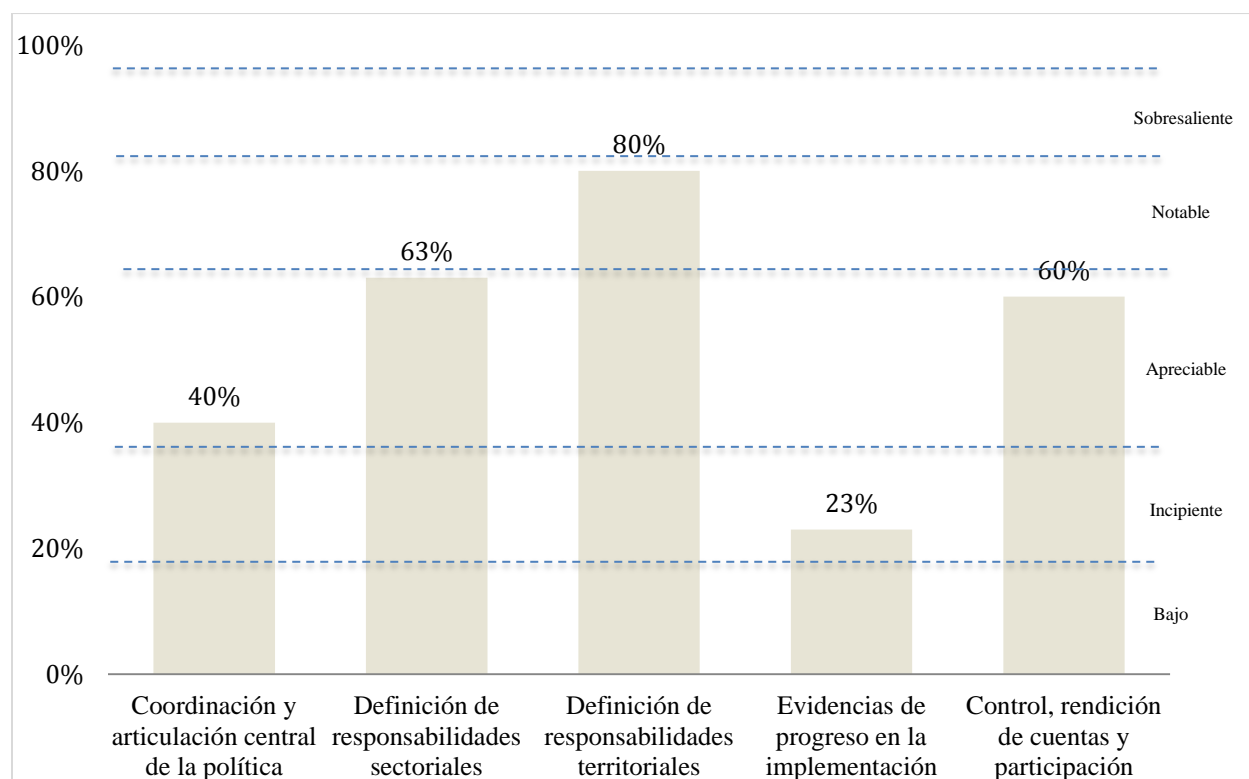
³⁴ Véase indicador RR-2-13

territorial³⁵. Sin embargo, no existe normatividad sobre manejo de cuencas y tampoco se realizan acciones de control sobre reducción de riesgo en la fase de construcción de infraestructura³⁶.

Cuadro 6. Reducción de Riesgo (RR) por fases de la Política Pública. Costa Rica (2013)

1	Coordinación y articulación central de la política	40%
2	Definición de responsabilidades sectoriales	63%
3	Definición de responsabilidades territoriales	80%
4	Evidencias de progreso en la implementación	23%
5	Control, rendición de cuentas y participación	60%

Gráfico 8. Reducción de Riesgo (RR) por fases de la Política Pública. Costa Rica (2013)



³⁵ Véanse indicadores RR-3-1, RR-3-2 y RR-3-3

³⁶ Véanse indicadores RR-3-4 y RR-3-5

d. Preparativos para la Respuesta (PR)

Resultado para el componente: 56% (“Apreciable”)

Como ya se ha comentado, a diferencia la tendencia que ha prevalecido en la región en las últimas décadas, en el caso de Costa Rica los Preparativos para la respuesta no son el componente con mayor cumplimiento de indicadores. Su rango es “*Apreciable*” y está cerca de alcanzar, de manera global, el 50% de los indicadores. Sin embargo, dentro de esta cifra se observa un comportamiento heterogéneo, puesto que la Coordinación central de la política alcanza un 88% de indicadores (rango “*Notable*”), el Control, rendición de cuentas y participación un 67% (rango “*Apreciable*”) y la Definición de responsabilidades territoriales un 60% (rango “*Apreciable*”). La Definición de responsabilidades sectoriales aparece con un nivel más reducido con un 47% (rango “*Apreciable*”) y, siguiendo la tendencia general, la Evidencia de progresos en la implementación es la responsable de reducir la medición general del Componente con un cumplimiento del 20% (rango “*Bajo*”).

Análisis cualitativo de los indicadores para cada fase de la política pública.

1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política (PR-1):

1.1. Coordinación y articulación central de la política,

En esta fase de la política pública se cumple un 88% de los indicadores, para un rango “*Notable*”, según los criterios del iGOPP.

La preparación para la respuesta cuenta con una importante cobertura jurídica dentro del país. El único indicador que no se cumple es la obligatoriedad, por norma expresa, de realizar simulaciones y simulacros o de elaborar protocolos³⁷. Ambos temas han sido una práctica constante en el país, sin embargo no está en la normativa.

³⁷ Véase indicador PR-1A-7

Aspectos como la existencia de una entidad para el manejo de crisis al más alto nivel político (Junta Directiva de la CNE y de forma más operativa el COE), así como de una cobertura normativa para las medidas de excepción en caso de desastre, resultan en un importante cumplimiento de condiciones.

1.2. Definición de responsabilidades sectoriales

En esta fase de la política pública se cumple un 47% de los indicadores, para un rango *“Apreciable”*, según los criterios del iGOPP.

Los sectores de agricultura, vivienda, educación, telecomunicaciones y transportes³⁸ cuentan con responsabilidades definidas explícitamente en sus marcos normativos.

1.3 Definición de responsabilidades territoriales

En esta fase de la política pública se cumple un 60% de los indicadores, para un rango *“Apreciable”*, según los criterios del iGOPP.

Dos indicadores de gran relevancia para los procesos de descentralización no se están cumpliendo: la definición de criterios de asistencia subsidiaria entre niveles de gobierno y la definición expresa de competencias para preparativos para la respuesta en la normatividad territorial.

2. Implementación de la política (PR-2):

2.1 Evidencias de progreso en la implementación

En esta fase de la política pública se cumple un 20% de los indicadores, para un rango *“Bajo”*, según los criterios del iGOPP.

³⁸ Véanse indicadores PR-1-B-4, PR-1-B-6, PR-1-B-7, PR-1-B-11 y PR-1-B-16

Con respecto a la implementación, se verificó asignación de recursos a través de instrumentos presupuestales para la preparación de la respuesta a la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias (CNE)³⁹. También, se verificó la asignación de recursos al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para la financiación de actividades de preparación para desastres⁴⁰, así mismo se verificó la asignación de recursos para la prevención y extinción de incendios forestales⁴¹. Con relación a la asignación de recursos para la preparación de la respuesta, a nivel sectorial solo se encontró evidencia en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte⁴². De otra parte, no se encontró evidencia de la existencia de planes de contingencia o continuidad de negocios a nivel sectorial⁴³. CNE está trabajando con los sectores en la elaboración de planes sectoriales de gestión de riesgo de desastres; se tiene previsto que dichos planes incluyan una sección de planes contingentes. Respecto de las empresas prestadoras de servicios públicos, no se encontró evidencia de la existencia de planes de emergencia⁴⁴.

3. Evaluación de la política (PR-3):

3.1. Control, rendición de cuentas y participación.

En esta fase de la política pública se cumple un 67% de los indicadores, para un rango “*Apreciable*”, según los criterios del iGOPP.

El país muestra importantes condiciones con respecto a mecanismos participativos y acciones de control por parte de la Contraloría General de la República. Sin embargo, dos indicadores altamente relevantes no son cumplidos: la realización de evaluaciones de calidad en los procesos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Desastres, así como la adopción de estándares de asistencia humanitaria.

³⁹ Véase indicador PR-2-1

⁴⁰ Véase indicador PR-2-2

⁴¹ Véase indicador PR-2-3

⁴² Véase indicador PR-2-10

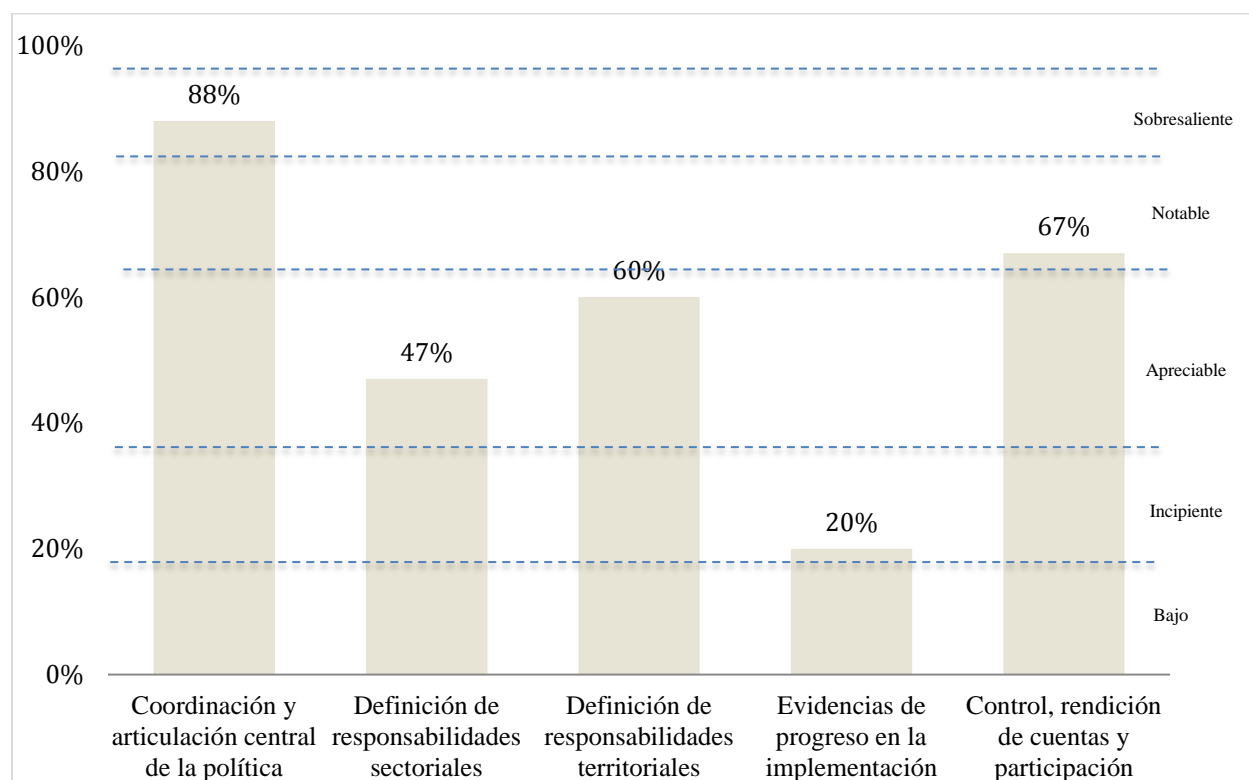
⁴³ Véase indicadores PR-2-4 a PR-2-12

⁴⁴ Véanse indicadores PR-2-13 a PR-2-15

Cuadro 7. Preparación para la Respuesta (PR) por fases de la Política Pública. Costa Rica (2013)

1	Coordinación y articulación central de la política	88%
2	Definición de responsabilidades sectoriales	47%
3	Definición de responsabilidades territoriales	60%
4	Evidencias de progreso en la implementación	20%
5	Control, rendición de cuentas y participación	67%

Gráfico 9. Preparación para la Respuesta (PR) por fases de la Política Pública. Costa Rica (2013)



e. Planificación de la recuperación post-desastre (RC)

Resultado para el componente: 40% (Incipiente)

Costa Rica es uno de los pocos países en la región que ha establecido una responsabilidad expresa en la reconstrucción para su entidad especializada en el manejo de emergencias. Si bien el resultado general es relativamente reducido – rango “*Incipiente*” – se puede observar como la situación a lo interno de las fases es sumamente heterogénea: La Definición de responsabilidades sectoriales y las Evidencias de progreso en la implementación no cumplen ninguno de los indicadores, con lo que se quedan en rango “*Bajo*” e impactan significativamente la valoración general. Por otra parte, la Coordinación y articulación central de la política y el Control, rendición de cuentas y participación alcanzan un 75% de los indicadores (rango “*Notable*”). La Definición de responsabilidades cumple un 50% de los indicadores (rango “*Apreciable*”).

Análisis cualitativo de los indicadores para cada fase de la política pública.

1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política (RC-1)

1.1. Coordinación y articulación central de la política

En esta fase de la política pública se cumple un 75% de los indicadores, para un rango “*Notable*”, según los criterios del iGOPP.

Esta fase muestra uno de los mejores niveles de cumplimiento de indicadores. Costa Rica es uno de los pocos países que cuenta, desde hace décadas, con normatividad expresa para los temas de reconstrucción. La CNE tiene responsabilidades directas en la coordinación e implementación de estas acciones. Es importante resaltar que la

normativa incluye la recuperación de medios de vida como uno de los procesos a abordar en el post-impacto⁴⁵.

De igual forma, la normatividad incluye la responsabilidad de realizar planificación ex-ante de la recuperación y de incluir la duración del período de transición entre la respuesta y la recuperación⁴⁶.

1.2. Definición de responsabilidades sectoriales

En esta fase de la política pública no se cumple ninguno de los indicadores, Por lo que se ubica en un rango “*Bajo*”, según los criterios del iGOPP.

1.4 Definición de responsabilidades territoriales

En esta fase de la política pública se cumple un 50% de los indicadores, para un rango “*Apreciable*”, según los criterios del iGOPP.

Es importante señalar que para esta fase se cuenta con dos indicadores únicamente. Se cumple uno de ellos y por eso el rango asignado es apreciable. Aun así, el indicador no cumplido es de alta relevancia en las tareas de descentralización de la GDR: no existen responsabilidades expresas de revisar los planes de desarrollo territorial, después de ocurrido un desastre.

2. Implementación de la política (RC-2):

2.1 Evidencias de progreso en la implementación.

En esta fase de la política pública no se cumple ninguno de los indicadores, para un rango “*Bajo*”, según los criterios del iGOPP.

⁴⁵ Véase indicador RC-1A-2

⁴⁶ Véanse indicadores RC-1A-7 y RC-1A-8 respectivamente

3. Evaluación de la política (RC-3):

3.1. Control, rendición de cuentas y participación.

En esta fase de la política pública se cumple un 75% de los indicadores, para un rango “*Notable*”, según los criterios del iGOPP.

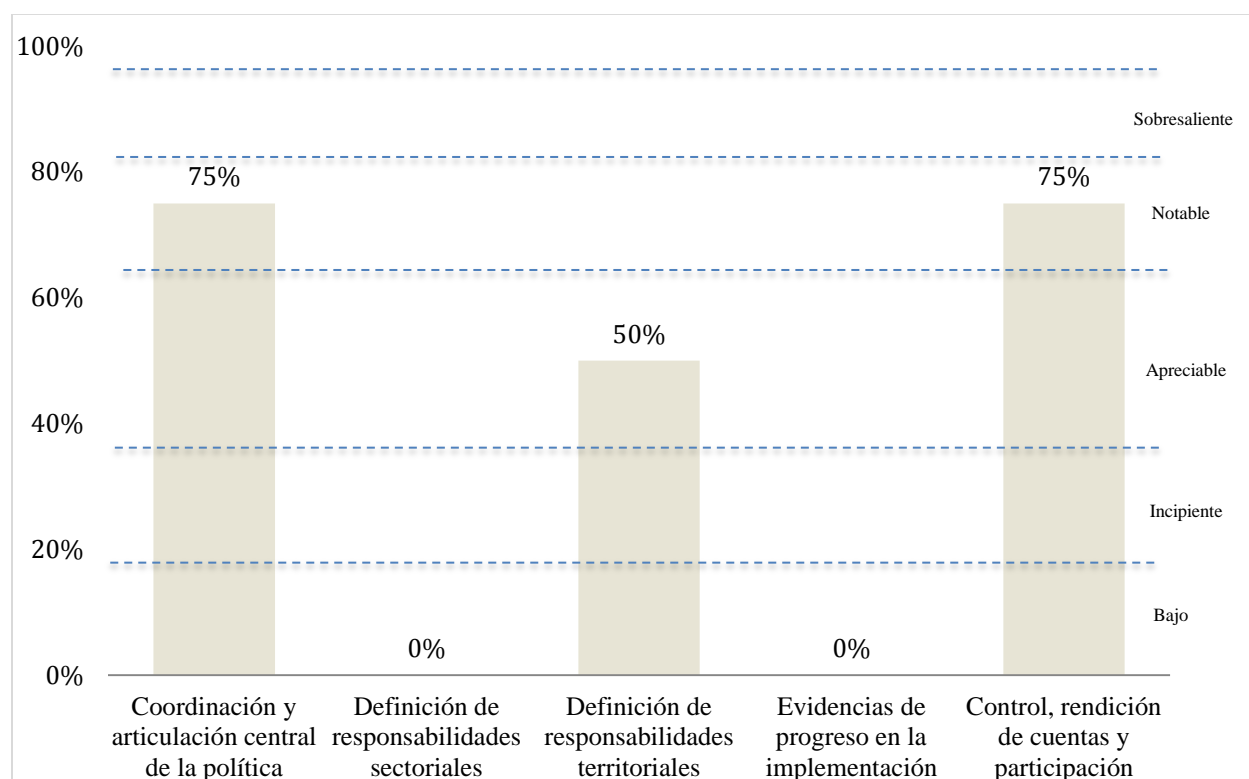
En términos de control, en Costa Rica sí es una práctica la participación de la Contraloría General de la República – de forma ex-post – así como la participación de entidades de la sociedad civil⁴⁷. El único indicador que no se cumple es la implementación de mecanismos de información al público sobre la recuperación, en situaciones de desastres de gran magnitud.

Cuadro 8. Planificación de la Recuperación Post – Desastre (RC) por fases de la Política Pública. Costa Rica (2013)

1	Coordinación y articulación central de la política	75%
2	Definición de responsabilidades sectoriales	0%
3	Definición de responsabilidades territoriales	50%
4	Evidencias de progreso en la implementación	0%
5	Control, rendición de cuentas y participación	75%

⁴⁷ Véanse indicadores RC-3-2, RC-3-1 y RC-3-4

Gráfico 10. Planificación de la Recuperación Post – Desastre (RC) por fases de la Política Pública. Costa Rica (2013)



f. Protección Financiera (PF)

Resultado para el componente: 22% (incipiente)

Este componente de política pública presenta el menor nivel de cumplimiento de indicadores entre todos los componentes observados en el iGOPP. Aun cuando el país cuenta con instrumentos de protección financiera tales como el Fondo Nacional de Emergencias, líneas de crédito contingente y la obligatoriedad de asegurar activos públicos, existen varios aspectos que podrían ser fortalecidos, tales como la definición de responsabilidades respecto del diseño e implementación de una estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres y la implementación de una estrategia de protección financiera para el sector agrícola.

Análisis cualitativo de los indicadores para cada fase de la política pública.

1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política (PF-1)

1.1. Coordinación y articulación central de la política

En esta fase de la política pública se cumple un 33% de los indicadores, para un rango *“Incipiente”*, según los criterios del iGOPP.

El iGOPP pudo verificar que la normatividad de gestión del riesgo de desastres establece fondos habilitados para financiar gastos emergentes en situaciones de desastres. A continuación se mencionan algunos aspectos relevantes del análisis a los tres niveles evaluados.

Fue posible evidenciar que Costa Rica cuenta con el Fondo Nacional de Emergencias (FNE), destinado para atender y enfrentar las situaciones de emergencia, prevención y mitigación⁴⁸. Cabe mencionar que todas las instituciones públicas de la administración central y descentralizada y las empresas públicas, están obligadas por ley a girar al FNE un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, que cada una de ellas reporte⁴⁹. De otra parte, no se encontró evidencia de fondos de desarrollo habilitados para financiar actividades de manejo de desastres⁵⁰. Tampoco se encontró evidencia de un marco legal e institucional que asigne responsabilidades respecto de la gestión financiera del riesgo de desastres.⁵¹

1.2. Definición de responsabilidades sectoriales

En esta fase de la política pública se cumple un 25% de los indicadores, para un rango de *“incipiente”*, según los criterios del iGOPP.

⁴⁸ Ver indicador PF-1A-1

⁴⁹ Ver indicador PF-1A-2

⁵⁰ Ver indicador PF-1A-6

⁵¹ Ver indicador PF-1A-3

El iGOPP permite evidenciar que existe normatividad (Ley de Control Interno) que establece que las entidades sectoriales deben cubrir sus activos públicos⁵². De otra parte, no existe normatividad que asigne competencias al sector Hacienda en materia de protección financiera frente al riesgo de desastres⁵³.

1.3. Definición de responsabilidades territoriales.

En esta fase de la política pública se cumple un 33% de los indicadores, para un rango *“incipiente”*, según los criterios del iGOPP.

Existe normatividad (Ley de Control Interno) que establece que las entidades territoriales deben cubrir sus activos públicos⁵⁴. De otra parte, no se identificaron fondos a nivel de la Municipalidad de San José para financiar actividades de manejo de desastres⁵⁵. Adicionalmente, la normatividad identificada no obliga a la Municipalidad de San José ni a ciudades con más de 100.000 habitantes a contar con estructuras de protección financiera frente el riesgo de desastres⁵⁶.

2. Implementación de la política (PF-2):

2.1 Evidencias de progreso en la implementación.

En esta fase de la política pública se cumple un 21% de los indicadores, para un rango de *“incipiente”*, según los criterios del iGOPP.

En relación a los instrumentos de retención del riesgo, como ya se mencionó, el iGOPP permite evidenciar que Costa Rica cuenta con el Fondo Nacional de Emergencias, para atender y enfrentar las situaciones de emergencia y de prevención y mitigación⁵⁷. Dicho

⁵² Ver indicador PF-1B-3

⁵³ Ver indicador PF-1B-2

⁵⁴ Ver indicador PF-1C-1

⁵⁵ Véase indicador PF-1C-3

⁵⁶ Véase indicador PF-1C-2

⁵⁷ Véase indicador PF-2-8

fondo cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo⁵⁸ y no está basado en una regla óptima de acumulación⁵⁹. De otra parte, el país cuenta con Préstamos Contingentes para Emergencias por Desastres Naturales con el BID y con el Banco Mundial⁶⁰.

Respecto de los instrumentos de transferencia del riesgo, no se encontró evidencia de la existencia de estándares para el aseguramiento de activos públicos⁶¹, ni de concesiones⁶², ni de directrices al respecto para las entidades territoriales⁶³.

El iGOPP encontró evidencia de que la Caja Costarricense de Seguro Social (la cual es la entidad líder en servicios de salud públicos en Costa Rica) cubre todas sus edificaciones para prestar servicios de salud con una póliza colectiva⁶⁴.

De otra parte, no se encontró evidencia que la ciudad capital (Municipalidad de San José) cuente con una estructura de protección financiera en caso de desastres⁶⁵.

No se encontró evidencia de la existencia de una estructura de protección financiera para el sector agrícola; el Ministerio de Agricultura y Ganadería está realizando gestiones para impulsar el aseguramiento agrícola en el país⁶⁶. De otra parte, iGOPP revela que no existen medidas ex ante para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres, ni siquiera para el sector agrícola⁶⁷.

⁵⁸ Véase indicador PF-2-9

⁵⁹ Véase indicador PF-2-10

⁶⁰ Véase indicador PF-2-11

⁶¹ Véase indicador PF-2-4

⁶² Véase indicador PF-2-5

⁶³ Véase indicador PF-2-7

⁶⁴ Véase indicador PF-2-13

⁶⁵ Véase indicador PF-2-1

⁶⁶ Véase indicador PF-2-15

⁶⁷ Véase indicador PF-2-14

3. Evaluación de la política (PF-3):

3.1. Control, rendición de cuentas y participación.

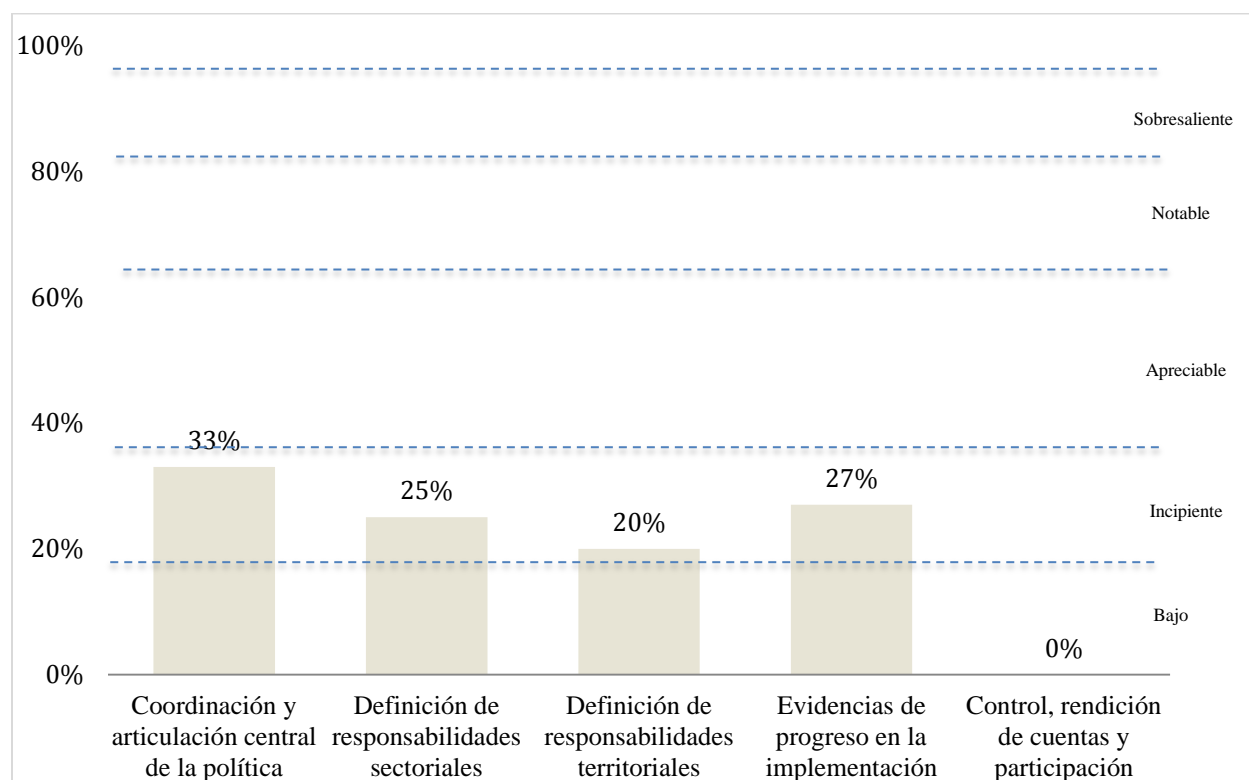
El iGOPP revela la ausencia de control, rendición de cuentas y participación frente a este componente⁶⁸, ningún indicador ha sido cumplido, para un rango de “*bajo*” según los criterios de este indicador.

Cuadro 9. Protección Financiera (PF) por fases de la Política Pública. Costa Rica (2013)

1	Coordinación y articulación central de la política	33%
2	Definición de responsabilidades sectoriales	25%
3	Definición de responsabilidades territoriales	33%
4	Evidencias de progreso en la implementación	21%
5	Control, rendición de cuentas y participación	0%

⁶⁸ Ver indicadores PF-3-1 a PF-3-3

Gráfico 11. Protección Financiera (PF) por fases de la Política Pública. Costa Rica (2013)



4. Conclusiones

- 1) En términos del “Marco general de gobernabilidad para la GRD”, se observa que Costa Rica cuenta con un marco jurídico moderno. Su Ley nacional de emergencias y prevención del riesgo data del 2005 y fue reglamentada en 2007 (en Costa Rica las leyes entran en vigencia aún sin estar reglamentadas). Por otra parte, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo fue aprobado por Decreto Ejecutivo en 2010. Es importante observar que, si bien aún se encuentra dentro del rango “Notable”, con un 84% de indicadores cumplidos, 4 de las 5 fases de política alcanzaron el 100% de cumplimiento, para un rango de “Sobresaliente” y es en las “Evidencias de progreso en la implementación” donde el comportamiento general se afecta, puesto que solo fue posible verificar un 20% de los indicadores (rango “Bajo”). La totalidad de indicadores no cumplidos está relacionado únicamente con aspectos presupuestarios y financieros.
- 2) Los componentes de “Identificación y conocimiento del riesgo” (49%), “Reducción del riesgo” (53%) y “Preparativos para la respuesta” (56%) muestran un nivel de alcance muy homogéneo. Llama la atención el nivel obtenido por los dos primeros, más ligados a los aspectos prospectivos y correctivos, mientras que los “Preparativos para la respuesta”, típicamente el componente más desarrollado por el devenir histórico que han tenido estas organizaciones, no es en el caso de Costa Rica el componente más desarrollado. Aun así, otro aspecto homogéneo en el comportamiento de estos tres componentes es que varias fases de la política alcanzan el nivel “apreciable”, y vuelve a ser “Evidencias de progreso en la implementación” el que aporta los niveles bajos, que generan promedios bajos. Es importante considerar que muchos de los indicadores no cumplidos se deben en realidad a la falta de acceso al verificable.
- 3) Los temas de “Planificación de la recuperación post-desastre”, con un 40% y de “Protección Financiera” con un 22% son los componentes que muestran el menor porcentaje de cumplimiento de indicadores, con una diferencia notable frente a los otros.

- 4) Siendo Costa Rica uno de los pocos países que tiene una legislación expresa para el proceso de recuperación, es importante observar que la distribución es altamente heterogénea entre las fases, con dos de ellas en 0%, una en 50% y dos en 75%. Esta situación muestra que la fragilidad mayor no está tanto en el marco jurídico expreso, sino en la presencia del tema en la normatividad sectorial (0%) y en el progreso en la implementación (0%).
- 5) El componente de Protección Financiera muestra un comportamiento de bajo cumplimiento muy homogéneo, ya que las fases que alcanzan la mayor cantidad de indicadores (Articulación central de la política y Definición de responsabilidades territoriales) cumplen únicamente un 33%.
- 6) La falta de un mecanismo que permita identificar a nivel del presupuesto la asignación de recursos a los distintos procesos de la gestión de riesgo de desastre ha limitado las posibilidades de valorar la implementación de los procesos de gestión del riesgo a nivel sectorial. Esto no significa que no se estén realizando avances en este sentido, sino que no han podido ser evidenciados por el iGOPP.
- 7) Con respecto a las fases de la política, vistas de forma transversal a todos los componentes, se puede observar que cuatro de ellas superan el 41% (rango “Apreciable”): Articulación central de la política, con un 64%; Definición de responsabilidades territoriales, con un 65%; Rendición de cuentas y participación con un 62% y Definición de responsabilidades sectoriales con un 47%. La fase de menor cumplimiento es la de Evidencias de progreso en la implementación, con un 19%.
- 8) La articulación central de la política, a lo largo de los componentes, se comporta de forma homogénea, lo que hace concluir que la normatividad para la gestión del riesgo en el país alcanza un nivel importante de las expectativas. Esto lleva a

concluir que una reforma a la normatividad expresa de la Gestión del Riesgo podría no ser prioritaria, vis à vis otras fases de la política pública.

- 9) En términos de lo sectorial, se puede observar una tendencia interesante en los Sistemas Específicos de Valoración del Riesgo Institucional, que se aproximan al concepto de continuidad de servicios y operaciones dentro del sector público. Este concepto, incluido en una Directriz de la Contraloría General de la República, podría constituir un espacio para el desarrollo comprehensivo de la gestión del riesgo, más allá de la normatividad expresa.
- 10) Una de las fases que debería caracterizar un enfoque sistémico articulado, como lo es la Definición de responsabilidades sectoriales, muestra un comportamiento general en el límite inferior del rango “apreciable”, con un 47%. Su comportamiento es heterogéneo entre los componentes, incluso con un 0% de cumplimiento en el componente de Planificación de la recuperación post-desastre.
- 11) En términos de control, el Sistema Nacional encabezado por la Contraloría y con una fuerte participación de la Sala Constitucional, juegan un papel preponderante en la gestión del riesgo en Costa Rica. Esto puede ser considerado como una buena práctica a observar y promover.
- 12) Costa Rica ha implementado varios instrumentos para gestionar desde el punto de vista financiero la ocurrencia de desastres, los cuales deben ser fortalecidos y gestionados de manera integral. Costa Rica carece de un marco legal e institucional que asigne responsabilidades al Ministerio de Hacienda frente al diseño e implementación de una estrategia financiera de gestión del riesgo de desastres, lo cual es un requisito para implementar una estrategia sostenible en el tiempo.

- 13) La adopción de un Marco Nacional para la Recuperación, o instrumento equivalente, con fuerza legal, es imprescindible para mejorar la calidad de los procesos ex-post. La consideración de la recuperación de los medios de vida debería ser reforzado.
- 14) La identificación y estimación del riesgo requiere de una fuerte reforma o actualización normativa, que permita articular y mejorar la calidad de una información, que hoy se genera a partir de importantes procesos de investigación, pero que no alcanzan aún los niveles de sinergia que su potencial permite. Sería recomendable el diseño y puesta en marcha de una plataforma de investigación e información sobre riesgo, que articule la información generada – bajo la forma de infraestructura de datos geoespaciales – y la haga disponible y utilizable en las diferentes escalas y niveles de gobierno.

5. Recomendaciones de Reforma Política

Componente de la GRD	Corto Plazo (1 a 4 años)	Mediano Plazo (4-8 años)	Largo Plazo (+ de 8 años)
<i>a. Marco general de gobernabilidad para la GRD (MG)</i>			
Promover el desarrollo e implementación de un mecanismo de clasificación presupuestal (objeto de gasto, etiquetador presupuestal o mecanismo equivalente) que permita realizar un seguimiento a la asignación y gasto público en acciones ex ante de gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático.	X		
Promover la adopción de instrumentos financieros para el incentivo presupuestas para las municipalidades, de forma que se fomente la inversión en GDR.	X	X	

Componente de la GRD	Corto Plazo (1 a 4 años)	Mediano Plazo (4-8 años)	Largo Plazo (+ de 8 años)
<i>b. Identificación y conocimiento del riesgo (IR)</i>			
Promover la adopción de normativa (creación o modificación) que establezca un marco articulado e integral que defina claramente las responsabilidades institucionales en la definición de metodologías y requerimientos para la generación de información sobre riesgo de desastres y efectos del cambio climático, en todos los componentes de la gestión del riesgo.	X		
Promover las modificaciones normativas que sean necesarias para integrar responsabilidades explícitas sobre el proceso de identificación del		X	

riesgo en el marco de atribuciones de todas las entidades sectoriales, instituciones autónomas, empresas del estado y empresas concesionarias de servicios públicos.			
Integrar en el sistema de información sobre riesgo, así como en los reportes anuales de cumplimiento del Plan Nacional de gestión del riesgo, información sobre las acciones, inversiones y productos de información que realizan los diferentes sectores y entidades del estado.	X		
Promover el establecimiento del mecanismo de control y evaluación de la calidad de la información sobre amenazas y riesgo así como de los procesos técnicos y científicos con quién son realizadas.		X	

Componente de la GRD	Corto Plazo (1 a 4 años)	Mediano Plazo (4-8 años)	Largo Plazo (+ de 8 años)
<i>c. Reducción de riesgo (RR)</i>			
Promover la adopción de normatividad para la integración de los procesos de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.	X		
Fortalecer la inclusión del análisis de riesgo de desastres en todas las fases del ciclo de inversión pública, no solo en la de formulación de proyectos	X		
Promover la adopción o modificación de normativa que integre que definan referentes de riesgos aceptable para las principales amenazas que enfrenta el país.		X	

Promover las modificaciones normativas que sean necesarias para integrar responsabilidades explícitas sobre el proceso de reducción del riesgo en el marco de atribuciones de todas las entidades sectoriales, instituciones autónomas, empresas del estado y empresas concesionarias de servicios públicos.		X	
Promover las modificaciones normativas que sean necesarias para integrar responsabilidades explícitas sobre el proceso de reducción del riesgo en el marco de atribuciones de las municipalidades.		X	
Integrar en el sistema de información sobre riesgo, así como en los reportes anuales de cumplimiento del Plan Nacional de gestión del riesgo, información sobre las acciones e inversiones que realizan los diferentes sectores y entidades del estado en reducción del riesgo, dentro de su ámbito de competencias.	X		
Promover modificaciones normativas que fomenten o habiliten la gestión de cuencas o ecosistemas, incluyendo responsabilidades específicas para su aplicación, actualización y evaluación.			X

Componente de la GRD	Corto Plazo (1 a 4 años)	Mediano Plazo (4-8 años)	Largo Plazo (+ de 8 años)
<i>d. Preparativos para la respuesta (PR)</i>			
Promover las modificaciones normativas que sean necesarias para integrar responsabilidades explícitas sobre el proceso de preparativos para la respuesta en el marco de atribuciones de todas las entidades sectoriales, instituciones autónomas, empresas del estado y empresas concesionarias de servicios públicos.	X		
Integrar en el sistema de información sobre riesgo, así como en los reportes anuales de cumplimiento del Plan Nacional de gestión del riesgo, información sobre las acciones e inversiones que realizan los diferentes sectores y entidades del estado en preparativos para la respuesta, dentro de su ámbito de competencias.	X		
Promover una política común que defina responsabilidades sectoriales y establezca lineamientos y metodologías para el desarrollo de estrategias y planes de continuidad de servicios y negocios frente a situaciones de desastres.	X		

Componente de la GRD	Corto Plazo (1 a 4 años)	Mediano Plazo (4-8 años)	Largo Plazo (+ de 8 años)
<i>e. Planificación de la recuperación post-desastre (RC)</i>			
Promover modificaciones normativas que integren la responsabilidad de realizar estudios, después de sucedido un desastre de gran magnitud, que permitan comprender las causas y mejorar los procesos de recuperación ex-post.		X	
Promover las modificaciones normativas que sean necesarias para integrar responsabilidades explícitas sobre el proceso de Planificación de la recuperación post-desastre en el marco de atribuciones de todas las entidades sectoriales, instituciones autónomas, empresas del estado y empresas concesionarias de servicios públicos.		X	
Integrar en los planes de recuperación post desastre criterios específicos sobre los procesos de recuperación de medios de vida, incluyendo la duración máxima entre las etapas de asistencia humanitaria por respuesta y la transición a la recuperación.	X		
Promover modificaciones en la normativa municipal o en las normas sobre planificación y ordenamiento del territorio, que establezca la responsabilidad de revisar los planes municipales de desarrollo después de sucedido un desastre, e integrar medidas de reducción del riesgo que surjan de las lecciones aprendidas.		X	
Desarrollar una metodología común para la elaboración de planes ex-ante de la	X		

recuperación post-desastre, aplicable a los sectores y unidades de gestión territorial, incluyendo un proceso de apoyo técnico para su elaboración.			
Diseñar e implementar un mecanismo de información al público, en especial a las personas afectadas, sobre los procesos acciones e inversiones de recuperación.	X		

Componente de la GRD	Corto Plazo (1 a 4 años)	Mediano Plazo (4-8 años)	Largo Plazo (+ de 8 años)
<i>f. Protección financiera (PF)</i>			
Generar un marco legal e institucional que asigne responsabilidades al Ministerio de Hacienda respecto del desarrollo de una estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres	X		
Realizar estudios de evaluación del riesgo de desastres que permitan dimensionar las necesidades de recursos para enfrentar la ocurrencia de eventos menores y de eventos catastróficos	X		
Para efectos de fortalecer el Fondo Nacional de Emergencias se recomienda realizar estudios de evaluación de riesgo que permitan definir el porcentaje anual de recursos que debe asignársele	X		
Se recomienda que el país señale de forma explícita como los instrumentos financieros que el país está implementado, hacen parte y se articulan con la estructura de protección financiera de la ciudad capital en caso de		X	

desastre			
Respecto de la normatividad que regula las reservas que realiza el sector asegurador, se recomienda realizar estudios para evaluar la viabilidad de soportarlas en evaluaciones probabilistas del riesgo, de forma sean consistentes con las condiciones de riesgo		X	
Promover la adopción de una robusta estructura de protección financiera para el sector agrícola, que cuente con diversos instrumentos financieros para apoyar a los productores agrícolas.			X
Diseñar e implementar esquemas de seguros colectivos para la protección de vivienda.			X

Anexo I: Listado de Indicadores

Componente del índice: Marco general de la gobernabilidad [MG]

MG-1A Coordinación y articulación central de la política		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	Respuestas
MG-1A-1	¿Existe normatividad nacional que establece un marco de responsabilidades sobre la gestión del riesgo de desastres para todos los niveles de gobierno?	Sí
MG-1A-2	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece instrumentos de política para su implementación?	Sí
MG-1A-3	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que la coordinación y articulación de los instrumentos de política se debe realizar desde un nivel jerárquico igual o superior al ministerial?	Sí
MG-1A-4	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece la articulación con otras normas relacionadas con la Adaptación al Cambio Climático, gestión integrada de recursos hídricos, o planificación y ordenamiento del territorio?	Sí
MG-1A-5	¿El Plan Nacional de Desarrollo (o instrumento equivalente), establece objetivos, metas, o indicadores en la gestión del riesgo de desastres?	Sí
MG-1A-6	¿El Plan Nacional de Desarrollo (o instrumento equivalente), establece objetivos, metas, o indicadores en ACC?	Sí
MG-1A-7	¿Existe normatividad de cambio climático que establece la gestión del riesgo de desastres como una meta, fin, propósito o resultado?	Sí
MG-1A-8	¿Existe normatividad que establece un régimen de carrera profesional en la administración pública aplicable a las entidades responsables de la GRD en el país?	Sí

MG-1B Definición de responsabilidades sectoriales		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	Respuestas
MG-1B-1	¿Existe normatividad sobre gestión integrada de recursos hídricos que establece la gestión del riesgo de desastres como un propósito, fin o resultado?	Sí
MG-1B-2	¿Existe normatividad sobre gestión integrada de recursos hídricos que establece la adaptación al cambio climático como un propósito, fin o resultado?	Sí
MG-1B-3	¿La normatividad que regula la realización de evaluaciones de impacto ambiental (o proceso equivalente), integra el análisis de riesgo de desastres?	Sí

MG-1C Definición de responsabilidades territoriales		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	Respuestas
MG-1C-1	¿Existe normatividad que descentralice las responsabilidades en materia de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial u otros instrumentos de planificación y gestión del territorio a las unidades de gestión territorial?	Sí
MG-1C-2	¿Existe normatividad que establece un enfoque de cuenca o eco-región para la gestión ambiental o de recursos hídricos?	Sí
MG-1C-3	¿Existe normatividad que faculte a las Unidades de Gestión Territorial para la formación de redes, acuerdos, alianzas o convenios territoriales en GRD?	Sí
MG-1C-4	¿Existe normatividad que faculte la formación de estructuras de gestión territorial para la gestión integrada de recursos hídricos o manejo de ecosistemas?	Sí

MG-2 Evidencias de progreso en la implementación		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	Respuestas
MG-2-1	¿Existe un documento aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (o quien haga sus veces) que establece la estrategia financiera o las políticas para la gestión financiera del riesgo de desastres en el país?	No
MG-2-2	¿El ente responsable de las funciones de rectoría o coordinación o articulación de la gestión del riesgo de desastres en el país, ha recibido recursos para estas funciones en la última vigencia fiscal?	Sí
MG-2-3	¿Existe un objeto de gasto o clasificador presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional para asignar recursos a actividades <i>ex ante</i> de gestión del riesgo de desastres?	No
MG-2-4	¿Existe un objeto de gasto o clasificador presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional para asignar recursos a actividades de adaptación al cambio climático?	No
MG-2-5	¿Existe un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades <i>ex ante</i> de gestión del riesgo de desastres?	Sí
MG-2-6	¿Existe un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de adaptación al cambio climático?	No
MG-2-7	¿Existe un fondo o mecanismo equivalente del nivel nacional, habilitado para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado?	No
MG-2-8	¿Al menos uno de los tres fondos nacionales de desarrollo (o instrumento equivalente) con mayor asignación de recursos, está habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades <i>ex ante</i> en gestión del riesgo de desastres?	No
MG-2-9	¿Existen incentivos presupuestales para que las unidades de gestión territorial implementen acciones en gestión del riesgo de desastre <i>ex ante</i> ?	No
MG-2-10	¿Existen incentivos presupuestales para que los distintos sectores (ministerios) implementen acciones en gestión del riesgo de desastres <i>ex ante</i> ?	No

MG-3 Control, rendición de cuentas y participación		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	Respuestas
MG-3-1	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que la gestión del riesgo de desastres debe ser objeto de control por parte de las entidades de control?	Sí
MG-3-2	¿Existe normatividad sobre transparencia en la gestión pública?	Sí
MG-3-3	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación del cumplimiento de la normativa existente en gestión del riesgo de desastres en los últimos 5 años?	Sí
MG-3-4	¿La entidad nacional coordinadora de la GRD ha realizado en los últimos 3 años una evaluación de la gestión del riesgo de desastres en el país con participación de sectores y niveles territoriales?	Sí
MG-3-5	¿Existe al menos un mecanismo de participación de la sociedad civil aplicable a la gestión del riesgo de desastres?	Sí

Componente del índice: Identificación y conocimiento del riesgo [IR]

IR-1A Coordinación y articulación central de la política		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
IR-1A-1	¿Existe normatividad que designe un actor nacional responsable de brindar asistencia técnica y lineamientos a niveles territoriales y sectoriales para el análisis del riesgo de desastres?	Sí
IR-1A-2	¿Existe normatividad que designe un actor nacional responsable de la definición de metodologías para la elaboración de estudios sobre efectos de cambio climático?	No
IR-1A-3	¿Existe normatividad que ordene la creación y mantenimiento de Sistemas de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres?	Sí
IR-1A-4	¿Existe normatividad que establezca crear, sistematizar o actualizar bases de datos sobre los efectos de los desastres?	No

IR-1B Definición de responsabilidades sectoriales		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
IR-1B-1	¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos geológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos?	No
IR-1B-2	¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos climáticos e hidrológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos?	No
IR-1B-3	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que cada sector es responsable de realizar el análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales?	Sí
IR-1B-4	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las empresas prestadoras de servicios públicos son responsables de realizar el análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones?	Sí
IR-1B-5	¿La normatividad de ciencia, tecnología e innovación (o equivalente), incluye la promoción del conocimiento sobre el riesgo de desastres en el país?	No
IR-1B-6	¿La normatividad de ciencia, tecnología e innovación (o equivalente), incluye la promoción del conocimiento sobre el cambio climático en el país?	No
IR-1B-7	¿Existe normatividad para un desarrollo continuo y mantenimiento de redes de observación y monitoreo de al menos dos fenómenos naturales peligrosos en el país?	No
IR-1B-8	¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	Sí
IR-1B-9	¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	No
IR-1B-10	¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	Sí
IR-1B-11	¿La normatividad del sector vivienda define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	Sí
IR-1B-12	¿La normatividad del sector educación define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	Sí

IR-1B-13	¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	No
IR-1B-14	¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	No
IR-1B-15	¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	Sí
IR-1B-16	¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	No
IR-1B-17	¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	No
IR-1B-18	¿Existe al menos una norma que defina cuales son edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica del país?	Sí

IR-1C Definición de responsabilidades territoriales		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
IR-1C-1	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las unidades de gestión territorial son responsables de la evaluación del riesgo de desastres en sus respectivos territorios?	Sí
IR-1C-2	¿Existe normatividad que determine escalas de trabajo o niveles de resolución en que se deben zonificar las amenazas o riesgos en el territorio o bien que designe un actor nacional responsable de definir la escala o resolución en que se debe realizar el análisis de riesgo para los diferentes niveles de gobierno?	No
IR-1C-3	¿Existe normatividad que establezca la obligatoriedad de la zonificación de amenazas en ciudades?	Sí

IR-2 Evidencias de progreso en la implementación		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
IR-2-1	¿Se integra la temática de riesgo de desastres en los programas curriculares de educación en al menos el nivel básico (primaria) o secundario?	Sí
IR-2-2	¿Se integra la temática de cambio climático en los programas curriculares de educación en al menos el nivel básico (primaria) o secundario?	Sí
IR-2-3	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de ambiente para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	Sí
IR-2-4	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de agricultura para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
IR-2-5	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de salud para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
IR-2-6	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de vivienda para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No

IR-2-7	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de educación para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
IR-2-8	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de turismo para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
IR-2-9	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de transporte para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
IR-2-10	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
IR-2-11	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
IR-2-12	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de la energía para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
IR-2-13	¿La empresa prestadora el servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?	Sí
IR-2-14	¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años? (NOTA: en caso que no sea la misma empresa, tendría que cumplirse para cada una de ellas)	No
IR-2-15	¿La empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?	Sí

IR-3 Control, rendición de cuentas y participación		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
IR-3-1	¿Existe normatividad que haga obligatorio la disponibilidad de información para el análisis de riesgo y defina mecanismos o instrumentos para su intercambio?	Sí
IR-3-2	¿Existe normatividad que haga obligatorio la disponibilidad de información para estudios sobre cambio climático y defina mecanismos o instrumentos para su intercambio?	No
IR-3-3	¿La entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos geológicos ha realizado al menos una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información en los últimos 3 años?	No
IR-3-4	¿La entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos hidrológicos y meteorológicos ha realizado al menos una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información en los últimos 3 años?	No
IR-3-5	El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre la generación y disponibilidad de información sobre el riesgo de desastres en los últimos 5 años?	Sí
IR-3-6	¿La normatividad nacional de GRD establece la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre el riesgo de desastre?	Sí

Componente del índice: Reducción del riesgo de desastres y adaptación [RR]

RR-1A Coordinación y articulación central de la política		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
RR-1A-1	¿Existe normatividad que establece competencias <i>de forma articulada</i> entre reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para las entidades territoriales y sectoriales?	No
RR-1A-2	¿Existe normativa que defina referentes de riesgo aceptable para al menos 2 amenazas en el país?	No
RR-1A-3	¿Existe al menos una norma nacional que obligue a las entidades públicas a reducir la vulnerabilidad de edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica a través de medidas de reforzamiento o sustitución?	Sí
RR-1A-4	¿Existe normatividad que estipule un régimen de sanciones específico sobre el incumplimiento de normativa relacionada con el diseño, construcción o localización de infraestructura o edificaciones de carácter público y privado?	Sí
RR-1A-5	¿Existe normatividad que establezca la obligatoriedad de incorporar medidas de reducción del riesgo de desastre durante la fase de construcción en proyectos de infraestructura pública y privada?	No

RR-1B Definición de responsabilidades sectoriales		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
RR-1B-1	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que cada sector es responsable de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales?	Sí
RR-1B-2	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las empresas prestadoras de servicios públicos son responsables de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones?	Sí
RR-1B-3	¿Existe al menos una norma nacional de seguridad (código) para el diseño sismo resistente de edificaciones, o similar (por ejemplo: viento), que sea de obligatorio cumplimiento para proyectos públicos y privados?	Sí
RR-1B-4	¿La normatividad que regula los aspectos técnicos de construcciones, define parámetros de diseño especiales para edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica en el país?	Sí
RR-1B-5	¿La norma sismo-resistente ha sido revisada al menos una vez en los últimos 10 años?	Sí
RR-1B-6	¿La normatividad que regula la gestión ambiental integra en sus objetivos, metas o resultados de forma explícita la reducción del riesgo de desastres?	No
RR-1B-7	¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	No
RR-1B-8	¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	Sí
RR-1B-9	¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	Sí
RR-1B-10	¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	Sí
RR-1B-11	¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	Sí

RR-1B-12	¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	No
RR-1B-13	¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	No
RR-1B-14	¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	Sí
RR-1B-15	¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	Sí
RR-1B-16	¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	No
RR-1B-17	¿Existe normatividad que ordene realizar un análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto?	Sí
RR-1B-18	¿Existe normatividad que ordene integrar en la fase de pre-inversión la realización de estudios de cambio climático?	No
RR-1B-19	¿Existe normatividad que ordene realizar análisis de riesgo de desastres en otras fases del ciclo del proyecto diferente de la fase de pre-inversión?	No

RR-1C Definición de responsabilidades territoriales		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
RR-1C-1	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las unidades de gestión territorial son responsables de la reducción del riesgo de desastres en sus respectivos territorios?	Sí
RR-1C-2	¿La normatividad sobre funciones y competencias de las unidades de gestión territorial en el país, establece la reducción del riesgo de desastres como una de sus competencias?	No
RR-1C-3	¿La normatividad sobre ordenamiento o planificación territorial (o proceso equivalente), establece la zonificación de áreas en riesgo como determinante en la definición del uso y ocupación del suelo?	Sí
RR-1C-4	¿Existe normatividad para el mejoramiento integral de asentamientos humanos?	Sí
RR-1C-5	¿Existe normatividad para la relocalización de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo?	Sí

RR-2 Evidencias de progreso en la implementación		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
RR-2-1	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de ambiente para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
RR-2-2	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de agricultura para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
RR-2-3	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de salud para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
RR-2-4	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de vivienda para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No

RR-2-5	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de educación para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
RR-2-6	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de turismo para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
RR-2-7	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de transporte para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	Sí
RR-2-8	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
RR-2-9	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
RR-2-10	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de la energía para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	No
RR-2-11	¿La empresa prestadora el servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?	Sí
RR-2-12	¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años? (NOTA: en caso que no sea la misma empresa, tendría que cumplirse para cada una de ellas)	No
RR-2-13	¿La empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?	Sí

RR-3 Control, rendición de cuentas y participación		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
RR-3-1	¿Existe normatividad que establezca un régimen de sanciones por daños al medio ambiente para los infractores de naturaleza pública y privada?	Sí
RR-3-2	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre el cumplimiento de acciones en reducción del riesgo de desastres en los últimos 5 años?	Sí
RR-3-3	¿La normatividad que regula la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial (o similares), asigna responsabilidades para su monitoreo, evaluación y actualización?	Sí
RR-3-4	¿La normatividad que regula la planificación o manejo de cuencas hidrográficas (o instrumento de planificación equivalente), asigna responsabilidades para su monitoreo, evaluación y actualización?	No
RR-3-5	¿El ente nacional de control o ente regulador del sector, ha realizado al menos una evaluación de la aplicación de medidas de reducción de riesgo durante la fase de construcción de proyectos de infraestructura en los últimos 5 años?	No

Componente del índice: Preparación de la respuesta [PR]

PR-1A. Coordinación y articulación central de la política		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
PR-1A-1	¿Existe normatividad que establece una organización interinstitucional en el nivel nacional para los procesos de preparativos y respuesta?	Sí
PR-1A-2	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece un mecanismo, instancia o instrumento de manejo de crisis por desastre al más alto nivel político nacional?	Sí
PR-1A-3	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la formulación de protocolos oficiales para la coordinación de las operaciones o comando de incidentes?	Sí
PR-1A-4	¿Existe normatividad que permite activar un régimen temporal de medidas de excepción en caso de desastres, emergencia o calamidad pública?	Sí
PR-1A-5	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel nacional?	Sí
PR-1A-6	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece que las acciones de respuesta y asistencia humanitaria deban basarse en evaluaciones de daños y análisis de necesidades?	Sí
PR-1A-7	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la realización de simulacros y simulaciones?	No
PR-1A-8	¿Existe normatividad para la coordinación de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre?	Sí

PR-1B. Definición de responsabilidades sectoriales		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
PR-1B-1	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en los diferentes sectores o ministerios?	Sí
PR-1B-2	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, prevé la creación y operación de sistemas de vigilancia o alerta sobre fenómenos naturales peligrosos?	Sí
PR-1B-3	¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	No
PR-1B-4	¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	Sí
PR-1B-5	¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	No
PR-1B-6	¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	Sí
PR-1B-7	¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	Sí
PR-1B-8	¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	No

PR-1B-9	¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	No
PR-1B-10	¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación en caso de desastres en el ámbito de sus competencias?	No
PR-1B-11	¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	Sí
PR-1B-12	¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	No
PR-1B-13	¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de agua y saneamiento, obliga la formulación e implementación de planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres?	No
PR-1B-14	¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de telecomunicaciones, obliga la formulación de planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres?	No
PR-1B-15	¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de energía, obliga la formulación de planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres?	No
PR-1B-16	¿Existe normatividad que establece la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia asociados con el transporte, manipulación o procesamiento de sustancias peligrosas?	Sí
PR-1B-17	¿Existe normatividad que establece la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia ante derrame, combustión o contaminación por hidrocarburos?	Sí

PR-1C. Definición de responsabilidades territoriales		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
PR-1C-1	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta estipula instancias de coordinación en el territorio?	Sí
PR-1C-2	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece criterios de asistencia subsidiaria entre diferentes niveles de gobierno?	No
PR-1C-3	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece la formulación de planes de emergencia o contingencia al nivel territorial?	Sí
PR-1C-4	¿Existe normatividad, distinta de la de GRD o preparativos, que define competencias para las unidades de gestión territorial en preparación y respuesta?	No
PR-1C-5	¿Existe normatividad que habilita a los municipios a utilizar sus recursos propios fuera de su jurisdicción en situaciones de emergencia?	Sí

PR-2. Evidencias de progreso en la implementación		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
PR-2-1	¿El ente nacional responsable de la coordinación de la preparación de la respuesta, ha recibido recursos para estas funciones en la última vigencia fiscal?	Sí
PR-2-2	¿Al menos un servicio nacional de bomberos, ha recibido recursos para la financiación de actividades de preparación para desastres en la última vigencia?	Sí

	fiscal?	
PR-2-3	¿La entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales, ha recibido recursos para la financiación de actividades de preparación para desastres en la última vigencia fiscal?	Sí
PR-2-4	¿Cuenta el sector ambiental con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No
PR-2-5	¿Cuenta el sector agricultura con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?	No
PR-2-6	¿Cuenta el sector salud con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?	No
PR-2-7	¿Cuenta el sector vivienda con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No
PR-2-8	¿Cuenta el sector educación con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?	No
PR-2-9	¿Cuenta el sector turismo con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No
PR-2-10	¿Cuenta el sector transporte (o equivalente) con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?	No
PR-2-11	¿Cuenta el sector agua y saneamiento con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?	No
PR-2-12	¿Cuenta el sector energía con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?	No
PR-2-13	¿La empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre?	No
PR-2-14	¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre? (NOTA: en caso de no ser la misma empresa, deben cumplirlo todas)	No
PR-2-15	¿La empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre?	No

PR-3. Control, rendición de cuentas y participación		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
PR-3-1	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece mecanismos de participación de la sociedad civil en todas las unidades de gestión territorial?	Sí
PR-3-2	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación sobre preparativos para desastre en los últimos 5 años?	Sí
PR-3-3	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación ex post sobre el desempeño del gobierno en la respuesta en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional?	Sí
PR-3-4	¿La entidad nacional encargada de coordinar la preparación y la respuesta ha realizado al menos una evaluación sobre la calidad en sus procesos en los últimos 3 años?	No
PR-3-5	¿Las entidades nacionales encargadas de la preparación y la respuesta, han adoptado estándares de calidad en la asistencia humanitaria al menos en relación con agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal?	No
PR-3-6	¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de participación comunitaria para la respuesta?	Sí

Componente del índice: Planificación de la recuperación post-desastre [RC]

RC-1A. Coordinación y articulación central de la política		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
RC-1A-1	¿Existe normatividad sobre recuperación post-desastre que define la responsabilidad del estado frente a este proceso?	Sí
RC-1A-2	¿Existe normatividad que establezca que la recuperación de medios de vida es un propósito de la recuperación post-desastre?	Sí
RC-1A-3	¿Existe normatividad que establezca esquemas institucionales para la coordinación de la reconstrucción post-desastre?	Sí
RC-1A-4	¿Existe normatividad que establezca la realización de estudios sobre las causas de los desastres para orientar una recuperación que evite la restitución de las condiciones de riesgo preexistentes?	No
RC-1A-5	¿Existe normatividad que ordene la formulación de planes de recuperación post-desastre que explícitamente busquen reducir la vulnerabilidad preexistente?	Sí
RC-1A-6	¿Existe normatividad que ordene la formulación <i>ex ante</i> de planes de recuperación post desastre?	Sí
RC-1A-7	¿Existe normatividad que establece que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración de la etapa en que se apoyará el restablecimiento de los medios de vida, durante la transición entre la respuesta y la reconstrucción?	No
RC-1A-8	¿Existe normatividad que establece que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración del periodo en que se deben reparar o reconstruir las viviendas afectadas?	Sí

RC-1B. Definición de responsabilidades sectoriales		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
RC-1B-1	¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	No
RC-1B-2	¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	No
RC-1B-3	¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	No
RC-1B-4	¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	No
RC-1B-5	¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	No
RC-1B-6	¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	No
RC-1B-7	¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	No
RC-1B-8	¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	No
RC-1B-9	¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	No
RC-1B-10	¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	No

RC-1C. Definición de responsabilidades territoriales		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
RC-1C-1	¿Existe normatividad que regule la evaluación, revisión o actualización de planes de desarrollo después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas?	No
RC-1C-2	¿Existe normatividad que regule la evaluación, revisión o actualización de planes de ordenamiento territorial después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas?	Sí

RC-2. Evidencias de progreso en la implementación		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
RC-2-1	¿Cuenta el Ministerio de Ambiente (o entidad rectora o coordinadora del ambiente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No
RC-2-2	¿Cuenta el Ministerio de Agricultura (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No

RC-2-3	¿Cuenta el Ministerio de Salud (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No
RC-2-4	¿Cuenta el Ministerio de Vivienda (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No
RC-2-5	¿Cuenta el Ministerio de Educación (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No
RC-2-6	¿Cuenta el Ministerio de Turismo (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No
RC-2-7	¿Cuenta el Ministerio de Transporte (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No
RC-2-8	¿Cuenta el ente rector o coordinador del sector agua y saneamiento con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No
RC-2-9	¿Cuenta el ente rector o coordinador del sector telecomunicaciones con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No
RC-2-10	¿Cuenta el ente rector o coordinador del sector energía con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	No

RC-3. Control, rendición de cuentas y participación		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
RC-3-1	¿Existe normatividad que establezca mecanismos de participación de la sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales en la recuperación post-desastre?	Sí
RC-3-2	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación sobre la gestión del gobierno en la recuperación en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre de gran magnitud declarados por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional?	Sí
RC-3-3	¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de información a la población afectada sobre la recuperación?	No
RC-3-4	¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de participación comunitaria para la recuperación?	Sí

Componente del índice: Protección financiera [PF]:

PF-1A. Coordinación y articulación central de la política		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	SI/NO
PF-1A-1	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece fondos a nivel nacional para financiar gastos emergentes en situaciones de desastres?	Sí
PF-1A-2	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece el porcentaje anual de recursos a asignarse a los fondos a nivel nacional habilitados para gastos emergentes en situaciones de desastres?	Sí
PF-1A-3	¿Existe normatividad que establezca la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres en el país?	No
PF-1A-4	¿La normatividad que regula las provisiones técnicas del sector asegurador establece que la estimación de reservas de riesgo catastrófico para bienes de características no homogéneas/especiales está sustentada en modelos de evaluación probabilista del riesgo definidos o certificados por el ente regulador del sector?	No
PF-1A-5	¿La normatividad que regula las provisiones técnicas del sector asegurador establece que la estimación de reservas de riesgo catastrófico para bienes de características homogéneas/uniformes está sustentada en modelos de evaluación probabilista del riesgo definidos o certificados por el ente regulador del sector?	No
PF-1A-6	¿Existe normatividad que establezca fondos de desarrollo habilitados para financiar actividades de manejo de desastres?	No

PF-1B. Definición de responsabilidades sectoriales		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	SI/NO
PF-1B-1	¿Existe normatividad que establezca la responsabilidad fiscal del estado frente al riesgo de desastres?	No
PF-1B-2	¿Existe normatividad que asigne competencias al sector Hacienda, Finanzas o Economía, en materia de protección financiera frente al riesgo de desastres?	No
PF-1B-3	¿Existe normatividad que establezca que las entidades sectoriales deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro u otro tipo de mecanismo equivalente?	Sí
PF-1B-4	¿Existe normatividad sobre incentivos para el aseguramiento de la vivienda de los privados por riesgo de desastres?	No

PF-1C. Definición de responsabilidades territoriales		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
PF-1C-1	¿Existe normatividad que establezca que las entidades de los niveles territoriales deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro u otro tipo de mecanismo equivalente?	Sí
PF-1C-2	¿Existe normatividad que obligue a la implementación de estructuras de protección financiera ante desastres en ciudades con más de 100 mil habitantes?	No
PF-1C-3	¿La ciudad capital del país cuenta con un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres?	No

PF-1C-4	¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres de la ciudad capital del país, cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo?	No
PF-1C-5	¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres de la ciudad capital del país, está basado en una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores?	No

PF-2. Evidencias de progreso en la implementación		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
PF-2-1	¿La ciudad capital del país cuenta con una estructura de protección financiera en caso de desastre?	No
PF-2-2	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, ha dimensionado las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por <i>eventos catastróficos</i> para diferentes periodos de retorno?	No
PF-2-3	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, ha dimensionado las necesidades de recursos previstas para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por <i>eventos menores y frecuentes</i> ?	No
PF-2-4	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado estándares para el aseguramiento de edificaciones públicas en caso de desastres?	No
PF-2-5	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado estándares para el aseguramiento de las concesiones de al menos un servicio básico o infraestructura crítica en caso de desastres?	No
PF-2-6	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado requisitos mínimos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros para al menos algún bien de responsabilidad fiscal del Estado?	No
PF-2-7	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha generado directrices para las entidades territoriales para la protección financiera frente al riesgo de desastres?	No
PF-2-8	¿Existe un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres?	Sí
PF-2-9	¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo?	Sí
PF-2-10	¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, está basado en una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores?	No
PF-2-11	¿El país tiene suscrito al menos un crédito contingente explícitamente vinculado con la financiación de gastos emergentes en situaciones de desastre?	Sí
PF-2-12	¿Al menos un municipio de la ciudad capital del país cuenta con un instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado?	No
PF-2-13	¿Se ha implementado al menos un mecanismo de transferencia del riesgo para cubrir de forma colectiva el portafolio de bienes fiscales de al menos un sector?	Sí

PF-2-14	¿El Ministerio o Secretaría de Planificación del Desarrollo Nacional, o el Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, o la Entidad encargada de la Gestión del Riesgo de Desastres o el sector Agricultura, cuenta con al menos un instrumento financiero diseñado <i>ex ante</i> para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres?	No
PF-2-15	¿El Ministerio de Agricultura tiene una estructura de protección financiera del sector agricultura (o equivalente) frente al riesgo de desastres?	No

PF-3. Control, rendición de cuentas y participación		
Código	Pregunta de respuesta cerrada	
PF-3-1	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación del cumplimiento de la normativa existente sobre mecanismos de protección financiera en los últimos 5 años?	No
PF-3-2	¿El ente rector del sector asegurador ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre el uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo para la estimación de las reservas de riesgo catastrófico de las compañías de seguro en los últimos 3 años?	No
PF-3-3	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía ha realizado al menos una evaluación sobre la aplicación de los procesos de protección financiera en el país en los últimos 3 años?	No